UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

FACULTAD DE DERECHO

COMPETENCIA Y PLURALIDAD EN LA INFORMACIÓN EN LA TELEVISIÓN
COLOMBIANA

LUIS JAVIER ACOSTA CASTELLANOS

MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO EN CONVENIO CON LA UNIVERISAD DE
KONSTANZ

BOGOTÁ D.C., 11 de diciembre de 2015.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
1. TELEVISIÓN PARA PERSUADIR O PARA DEBATIR. LA IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA Y LA PLURALIDAD EN LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN.	12
1.1. LA TELEVISIÓN UN SUBJETIVO LENGUAJE DE IMÁGENES.....	13
1.2. LA TELEVISIÓN AUTORREFERENTE - CREADORA DE SU PROPIA REALIDAD.	14
2. “LA CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE MEDIOS ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA”. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Y LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA FRENTE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN.	21
2.1. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS FRENTE AL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.	21
2.1.1. PROSCRIPCIÓN DE LA CENSURA PREVIA	24
2.1.2. COMPETENCIA Y PLURALIDAD EN LA INFORMACIÓN	26
2.1.3. DEMOCRACIA.....	27
2.2. LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA FRENTE AL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN TELEVISIÓN.....	28
2.2.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	28
2.2.2. PROHIBICIÓN DE LA CENSURA PREVIA	30
2.2.3. COMPETENCIA, PLURALIDAD EN LA INFORMACIÓN Y DEMOCRACIA	32
2.2.4. PODER DE PENETRACIÓN DE LA TELEVISIÓN SOBRE LA SOCIEDAD.	36
3. POLITIZACIÓN DE LA PANTALLA. EL DEVENIR HISTÓRICO DE NUESTRA TELEVISIÓN Y LA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA CREAR COMPETENCIA Y PLURALIDAD.	40
3.1. DE ROJAS PINILLA A LA CONSTITUYENTE DEL 1991.....	40

3.2.	CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MANEJO DE LA TELEVISIÓN.	50
3.2.1.	CONTRADICCIONES AL SENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.	51
3.2.2.	CONTRADICCIONES ENTRE LA CONSTITUCIÓN DE 1991, LA LEY 182 DE 1995 Y LA LEY 335 DE 1996.	53
3.3.	SUPRESIÓN DEL MODELO CONSTITUCIONAL Y CREACIÓN DEL MODELO ACTUAL CON MAYOR INTERVENCIÓN DE LOS GOBIERNOS DE TURNO....	57
4.	ATRAPADOS EN EL STATU QUO DE CARACOL Y RCN. EL MERCADO ACTUAL DE LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA VISTO DESDE LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES DE COMPETENCIA Y PLURALIDAD EN LA INFORMACIÓN.....	62
4.1.1.	CLAUSULA DE EXCLUSIVIDAD	64
4.1.2.	OPOSICIÓN DEL DUOPOLIO A LA ENTRADA DE COMPETENCIA.	64
4.1.3.	CONCEPTOS Y DECISIONES TANTO DE LA PROCURADURIA Y DEL CONSEJO DE ESTADO.	68
4.1.4.	OBSTÁCULOS PARA LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.....	73
4.2.	EFFECTOS DE LA CONCENTRACIÓN DEL MERCADO.....	75
5.	“LA TAL CONVERGENCIA NO EXISTE”. APOORTE A LA COMPETENCIA Y LA PLURALIDAD DE LA INFORMACIÓN DESDE LA CONVERGENCIA Y LAS MODALIDADES DE TELEVISIÓN DIFERENTES A LA PRIVADA.....	81
5.1.	“LA TAL CONVERGENCIA NO EXISTE”. APOORTE A LA COMPETENCIA Y LA PLURALIDAD DE LA INFORMACIÓN DESDE LA CONVERGENCIA.....	85
5.2.	DIVERGENCIA NORMATIVA E INSTITUCIONAL DENTRO DE UN ESCENARIO CONVERGENTE.....	88
6.	CONCLUSIONES	96
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	101
7.1.	TEXTOS IMPRESOS	101

7.2.	DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS	103
7.3.	JURISPRUDENCIA	108

COMPETENCIA Y PLURALIDAD EN LA INFORMACIÓN EN LA TELEVISIÓN COLOMBIANA

INTRODUCCIÓN

A través del artículo 75 de la Constitución Política de 1991, nacieron en Colombia las garantías de competencia y pluralidad en la información, con el fin de que repercutieran significativamente en el fortalecimiento de la democracia y en el derecho fundamental a recibir y transmitir información veraz e imparcial. El constituyente partió del supuesto de que, a mayor número de operadores, los individuos tendrían más puntos de vista sobre la información publicada en los medios, más sectores de la sociedad podrían comunicarse masivamente y adicionalmente, se optimizaría el control sobre la gestión del estado, dado el interés que los medios de comunicación tienen por la actividad de los gobernantes, funcionarios e instituciones.

Precisamente, en armonía con el propósito del artículo 75 de la Carta política, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000), a través de “Los principios sobre libertad de expresión” de la Relatoría Especial para la libertad de expresión, ha dicho que los monopolios en los medios de comunicación conspiran contra la democracia, pues en lugar de servir para difusión de la libertad de expresión la restringen, así mismo la Corte Constitucional ha señalado respecto al objeto de la mencionada norma constitucional:

“...Uno de esos objetivos es asegurar el pluralismo informativo, el cual se manifiesta en la existencia y coexistencia de distintos operadores de televisión que puedan llevar a los usuarios diferentes contenidos

que sean reflejo de la realidad circundante, así como en la multiplicidad de puntos de vista en los contenidos de los medios de comunicación ya sea en términos políticos, étnicos, religiosos, culturales, etc. de modo que la inmensa variedad de realidades sociales encuentre su lugar y representación en los medios de comunicación...”. (C-654-2003, de 5 de agosto M.P. Clara Inés Vargas)

Pese a la existencia del mandato constitucional para que se garantice la competencia y la pluralidad en la información, el mercado de la televisión en Colombia lamentablemente hoy, después de 24 años de expedida la nueva Carta Política, muestra signos bastante claros de hallarse rezagado, no solo por el hecho de que CARACOL y RCN Televisión sean los dos únicos operadores privados nacionales existentes desde hace ya 18 años, sino porque además aglutinan de manera desmedida la mayoría de la audiencia televisiva, llegando hasta el 90.8% (ACIM-EGM, 2014), lo que deja en entredicho la efectividad del estado para materializar el artículo 75 de la Constitución.

Esta concentración del mercado adquiere mayores dimensiones si tomamos en cuenta que la televisión ocupa, por amplio margen, el primer lugar en las preferencias de los colombianos por encima de cualquier otro medio de comunicación. Para el año 2012, mientras el 91,1% de los hogares colombianos poseía televisor convencional a color, LCD, plasma o LED; 95,2% en las cabeceras y 76,5% en el resto; en el caso del internet solo el 32,1% de los hogares poseía esta conexión; 39,9% para las cabeceras y 4,7% en el resto (DANE-2012). Lo propio puede decirse de los canales públicos nacionales, pues su audiencia no supera el 17.2% (ACIM-EGM, 2014).

Ahora bien, bajo este estado de las cosas, resulta importante preguntarnos, ¿Cumple la televisión colombiana las garantías constitucionales de competencia y pluralidad en la información?

Encontrar la respuesta a este interrogante nos llevará a través de un método descriptivo y analítico, a entender cómo se entrelaza el devenir histórico con la realidad actual del mercado de la televisión nacional. Así pues, nuestro objetivo general será evidenciar que desde la llegada de la televisión al país hasta el día de hoy, ha hecho carrera un manejo institucional del medio que procura de manera constante capturarlo para ponerlo al servicio de intereses políticos y, más recientemente, por la falta de una política clara que impulse la competencia y la pluralidad, facilitando la consolidación de rancios monopolios, que van en contravía de los designios de nuestra Carta Política.

En cuanto a nuestros objetivos específicos, para poder dimensionar la problemática frente a la democracia, queremos que el lector logre dimensionar la enorme influencia que tienen los medios masivos sobre la sociedad y la importancia consecuente que tiene garantizar la competencia y pluralidad en la información. Igualmente queremos demostrar cómo la instrumentalización del medio para favorecer intereses políticos y económicos ha mutado pero se mantiene, desde Rojas Pinilla, pasando por el sistema mixto y el debilitamiento del modelo autónomo creado por la Constitución de 1991 gracias a diversas contradicciones legales, hasta llegar a la ANTV, entidad con menor grado de autonomía que su predecesora respecto del ejecutivo y que luego de tres años de creada, no ha abierto siquiera la primera licitación para un nuevo canal privado, ni se vislumbra que en futuro próximo ello vaya a ocurrir.

Complementario a lo anterior, otro de nuestros objetivos específicos, será explicar cómo, a pesar de que la expedición de la constitución de 1991 y la creación de la televisión privada, fueron momentos claves para el fortalecimiento de la competencia y la pluralidad, luego de casi dos décadas sin nuevas adjudicaciones, el fenómeno de concentración del mercado se ha acrecentado.

En este orden de ideas, otro de nuestros objetivos será describir y explicar las dificultades que complejizan en extremo, tal como están las cosas en el presente, el éxito un nuevo proceso licitatorio; circunstancia que está marcada no solo por la reacción lógica del duopolio de la televisión privada para mantenerse como tal, sino también basados en las experiencias pasadas, en trabas legales, la intervención de la Procuraduría y el Consejo de Estado, que cerraron las puertas a nuevos concesionarios sin sopesar el rango constitucional de las garantías de competencia y la pluralidad en la información, ni tampoco la importancia que les da el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debido a su repercusión sobre el derecho fundamental a recibir y difundir información veraz e imparcial.

El último de nuestros objetivos específicos consistirá en mostrar cómo se ha transformado el mundo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC y la poca adaptabilidad institucional y regulatoria a la que nos enfrentamos; para ello analizaremos cómo la administración estatal de la televisión deben armonizarse con esta realidad, pues los factores diferenciadores que permitían contar con regulaciones distintas entre un medio y otro, se han ido

diluyendo, debido entre otras circunstancias, a la convergencia tecnológica, empresarial y de pantalla.

En cuanto al contenido del presente trabajo investigativo, en el primer capítulo explicaremos el lenguaje televisivo como forma de persuasión, evidenciando el latente estado de vulnerabilidad de quienes basan su conocimiento tan solo en la aprehensión de imágenes. En el segundo capítulo estudiaremos los pronunciamientos de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional de Colombia, a fin de dimensionar las repercusiones negativas que tiene la concentración de medios sobre la libertad de expresión y la democracia, y asimismo rescatar la importancia de sus decisiones y declaraciones, en tanto deben ser una guía para las políticas y la gestión que desarrolle el estado colombiano para afianzar la competencia y la pluralidad de nuestra televisión.

En el tercer capítulo describiremos cómo en la historia de nuestra televisión existen serios referentes que demuestran la politización de la administración estatal del medio, en detrimento de la competencia, pluralidad y libertad de expresión, desde las campañas propagandísticas de Rojas Pinilla hasta los vergonzosos eventos de censura vividos durante la toma del palacio de justicia, conforme a los cuales por directriz ministerial, se deja de transmitir el desarrollo de los hechos en directo desde las afueras del palacio y en su lugar se ordena transmitir el partido Millonarios-Unión Magdalena, “...para distraer un poco la atención nacional...” (McCausland, 2012).

En el cuarto capítulo veremos que de manera reactiva a la censura vivida en la toma del Palacio de Justicia, empieza a gestarse un nuevo modelo de administración de la televisión a

través de la Constitución de 1991. En especial, nos detendremos en el año 1997 momento en el que se crea una nueva modalidad del servicio, la televisión privada nacional. Aprovecharemos este momento de la investigación para explicar cómo en la actualidad se imponen diversas barreras de entrada a nuevos concesionarios, siendo fundamental para este propósito analizar las circunstancias que rodearon la caída de los dos únicos procesos de adjudicación de un tercer canal, licitaciones que debido a su frustrada condición, perpetúan de manera indefinida el duopolio de la televisión privada nacional.

En el quinto capítulo haremos un recorrido por las modalidades del servicio de televisión diferentes a la televisión privada y analizaremos su tenue y limitado aporte a la competencia y la pluralidad en la información. Igualmente veremos cómo, de forma alternativa a los medios tradicionales, la convergencia representa un aporte importante a la competencia y la pluralidad, que requiere de la debida adaptación normativa, ya que la vigilancia de las concesiones de los operadores actuales, requieren un desarrollo normativo que abarque y entienda las nuevas posibilidades tecnologías y empresariales, además, porque el acto legislativo 002 de 2011, al sepultar el modelo constitucional, ordenó dictar una nueva política de televisión, que aún hoy espera dar a luz en el Congreso de la República, todo esto en desmedro de la competencia y la pluralidad en la información ordenadas en el artículo 75 por la Constitución Política de 1991.

Finalmente, debemos mencionar que para llevar a cabo esta investigación, se realizó el estudio de diferentes fuentes bibliográficas, nacionales e internacionales, que nos ayudaron a comprender las posibilidades del lenguaje audiovisual y también la importancia de contar con medios en verdadera competencia. Igualmente en materia legal fue de suma importancia

comprender la relevancia que le da Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Constitucional a los derechos de libertad de expresión e información, la manera como advierten los camuflajes que puede adoptar la censura y su oposición irrestricta a cualquier forma de oligopolio, pues en lugar de facilitar el flujo de ideas e información restringen la libertad de expresión.

Otro aspecto importante para llevar a cabo esta investigación, consistió en estudiar la gestión adelantada por la Comisión de Televisión para buscar adjudicar un nuevo canal privado, para ello consultamos los documentos que formaron parte de los dos únicos procesos licitatorios de adjudicación del tercer canal, consulta que se llevó a cabo gracias al SECOP. Igualmente resultó primordial el análisis estadístico fruto de los datos del Estudio General de Medios –EGM- que generosamente fueron suministrados por la Asociación Colombiana de Medios –ACIM- para esta investigación, y en cuyo procesamiento tuvimos en cuenta de manera comparativa la audiencia de la televisión pública (Canales regionales, locales y nacionales públicos) frente a los canales privados. También tomamos como referencia el cubrimiento del internet y los hogares que efectivamente reciben este servicio, según reporte del Departamento Nacional de Estadística DANE. En cuanto al aumento del cubrimiento de la televisión por cable nos valimos de la información reportada por el Consejo Latinoamericano de Publicidad en Multicanales –LAMAC. Asimismo, fue significativo para la investigación contar con las explicaciones y cifras sobre el mercado actual de la televisión dadas por la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV, aunque su obtención, luego de haberse solicitado insistentemente por varios meses, implicó la presentación de una tutela para que se nos amparara el derecho de petición e información.

1. TELEVISIÓN PARA PERSUADIR O PARA DEBATIR. LA IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA Y LA PLURALIDAD EN LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN.

Dada la importancia que tiene en nuestra sociedad medios de comunicación como la televisión, nuestra Constitución consagra como un derecho fundamental el poder contar con información veraz e imparcial, es así como el artículo 20 de nuestra Constitución señala: “... Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación...”.

Para darle vida a esta aspiración constitucional la sociedad debe contar con la posibilidad de tener diferentes puntos de vista sobre la información publicada, postulado que es recogido por el artículo 75 de la Carta Política, al establecer como deber del estado garantizar la competencia y la pluralidad de la información: “Artículo 75... Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”.

Resaltando la importancia de la competencia y la pluralidad en la información específicamente frente a la Televisión, esto ha dicho la Corte Constitucional:

“...El tamaño y la profundidad de la democracia, en cierta medida resultan afectados por la libertad de acceso y el pluralismo que caracterice a la televisión y ellas, sin lugar a dudas, pueden resentirse cuando

el medio se convierte en canal propagandístico de la mayoría política o, más grave aún, de los grupos económicos dominantes...”. (C-497-1995, de 3 de octubre)

Para poder explicar la enorme influencia que medios como la televisión tienen sobre nuestra sociedad, hasta el punto que la misma Constitución establece previsiones, recalçadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Constitucional, encaminadas a la optimización de la competencia y la pluralidad de los contenidos, debe tomarse en cuenta por lo menos estos dos aspectos:

- i) El poder de persuasión que genera la transmisión de información a través del uso imágenes tal como lo hace la televisión, generando un ambiente de realidad y de convicción.
- ii) Las dificultades que plantea comunicar fielmente la realidad; es decir, veraz e imparcialmente sin anteponer ideologías, intereses políticos o económicos, máxime si nos hallamos ante fenómenos como las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético (Artículo 75 C.P.), tal como empezaremos a explicarlo enseguida.

1.1. LA TELEVISIÓN UN SUBJETIVO LENGUAJE DE IMÁGENES.

Para comprender la importancia que tienen las garantías de competencia y pluralidad en la información en materia de televisión, debemos empezar por entender los alcances del lenguaje televisivo, el cual se basa en el uso y transmisión de imágenes, recursos de los que se deriva su poder de persuasión. Académicos tan importantes como Nicklas Luhman, Giovanni Sartori e Ignacio Ramonet, entre otros, han tratado de sintetizar las principales características que hacen

de la televisión uno de los principales medios de comunicación de masas. Por ejemplo Sartori (2005), señala que el uso privilegiado de medios audiovisuales sobre los escritos, disminuye nuestra capacidad cognitiva debido a la falta de desciframiento y comprobación de lo que estamos viendo:

“...Es la televisión la que modifica primero y fundamentalmente, la naturaleza misma de la comunicación, pues la traslada del contexto de la palabra (impresa o radiotransmitida) al contexto de la imagen. La diferencia es radical. La palabra es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender... Por el contrario la imagen es pura y simple representación visual. La imagen se ve y eso es suficiente...”. (p.45)

Sartori destaca así la falta de discernimiento para procesar mentalmente las imágenes y como por el contrario, el uso del lenguaje escrito u oral, requieren necesariamente de una abstracción mental, que nos lleva a representar y replantear los datos recibidos. Por ello, al primar como en la actualidad el lenguaje visual; nuestra civilización retrocede del homo sapiens al homo videns, del hombre que dialoga, que controvierte y que es locuaz por naturaleza, al hombre que con observar le basta para formar su conocimiento.

1.2. LA TELEVISIÓN AUTORREFERENTE - CREADORA DE SU PROPIA REALIDAD.

De manera complementaria al punto anterior, Ramonet (2008) describe con claridad el peligro o riesgo que encierra la generación falseada de conocimiento formado exclusivamente a partir de imágenes. Teorías como el geocentrismo o concepciones antiguas como aquella que señalaba

que la tierra era plana, son ejemplos de cómo la percepción de “realidad” a partir lo que vemos, no constituye un parámetro suficiente para generar un conocimiento confiable y certero; sin embargo debido al auge de la televisión, la interpretación del mundo desde la simple visualización parece cobrar fuerza. Por ello según Ramonet:

“...El diario televisado, principalmente gracias a su ideología de lo directo y del tiempo real, ha ido imponiendo poco a poco un concepto radicalmente distinto de la información. Informarse es entonces, mostrar la historia en marcha o, más concretamente, hacernos asistir en directo al acontecimiento... la imagen del acontecimiento (o su descripción) basta para darle toda su significación... nuestra racionalidad moderna se ha edificado muy exactamente contra el postulado ver es comprender... La razón y el razonamiento son los que me hacen comprender, y no los ojos. Cuando la información moderna se funda en la idea de que ver es comprender, contribuye a una formidable regresión intelectual que nos hace volver varios siglos atrás, a la era pre racional...”. (p.77).

Sumando a lo anterior, debe tenerse en cuenta que aspectos técnicos como la edición, la utilización deliberada de planos para la magnificación de un personaje o situación, la repetición, la gesticulación o los comentarios del presentador de noticias, son recursos que permiten transmitir al espectador una idea preconcebida, por ello la Corte Constitucional haciendo una aproximación al tema, ha dicho:

“...A diferencia de la prensa escrita, que le permite al receptor analizar la información que se le brinda, confrontarla, discernirla, volver a ella una y otra vez, la información que proviene de medios masivos como la televisión, es una información en extremo concisa, fragmentada, con la cual se “bombardea” al espectador, quien apenas tiene tiempo de captar las imágenes, previa y unilateralmente

seleccionadas por el emisor, y de escuchar la interpretación que de las mismas éste hace...2. (C-395-97, de 20 de agosto)

Lo que queda latente de todos estos estudios antes mencionados, es que existe una alta posibilidad de que proveedores de contenidos noticiosos a través del uso de la televisión puedan llegar a ser autorreferentes, es decir, generadores de su propia realidad, situación que es facilitada por el uso de imágenes. Sobre este punto Luhman señala que existe un encadenamiento en la información que transmiten los medios de masas en el que: "...cada emisión se compromete con la siguiente emisión. Nunca se trata de la representación del mundo tal como es en ese momento..." (Luhman. 2000, p. 16-19); Por ello, aunque exista en la sociedad la necesidad de información; aproximarse o hacer un esfuerzo por transmitir neutralmente deja de ser el principal propósito, para propenderse más bien, hacia el cuidado de los índices de audiencia, la promoción o desprestigio de un proyecto, grupo o figura del mundo político o, en el mejor de los casos, la creación de aceptación o fascinación sobre un producto, en una experiencia de auto reproducción.

Por lo expuesto, nuestra Carta Política prevé la necesidad de contar con un mercado de medios en competencia, donde como consecuencia, exista pluralidad de fuentes de información, a través de los cuales se permita al ciudadano formarse su propio criterio, lo que a la postre redundará en una mejor formación de la sociedad en los asuntos públicos y la actividad de sus gobernantes, trayendo en últimas como resultado el fortalecimiento de la democracia, tal como lo advierte la Corte Constitucional:

“...Los procesos de comunicación que se surten a través de los medios masivos de comunicación, y especialmente de la televisión que es uno de los medios de comunicación de más amplia cobertura y gran nivel de penetración, al cual tiene acceso prácticamente la totalidad de la población de un país, cumplen un papel determinante, como lo ha señalado esta Corporación, en la consolidación o debilitamiento de la democracia, pues ellos, cuyo principal objetivo es “persuadir o disuadir al receptor” a través de la información, contribuyen de manera decisiva a la conformación de la “opinión pública”, que es en últimas la que con sus decisiones legitima o no a los poderes constituidos...”. (C-350-1997, de 29 de julio).

Sumado a lo anterior, el poder de la televisión se acrecenta al ver sus índices de audiencia a nivel mundial, por ejemplo, según la empresa Nielsen (2012), el promedio que los estadounidenses dedican a ver televisión es de más de 34 horas por semana, es decir casi 5 horas diarias, sin incluir las de 3 a 6 horas semanales que dedican a ver programas de televisión grabados. Según un estudio de la Oficina de las Comunicaciones Británica – Ofcom (2013), en el año 2013 en Inglaterra el espectador promedio vio un poco más de cuatro horas al día, 15 minutos más que en 2008. En ese mismo año, según US Media Consulting (2013), los argentinos vieron televisión un promedio de 6 horas al día y los colombianos 4 horas, siendo el promedio mundial de 3 horas con 12 minutos.

Así las cosas, tenemos que sumado a su poder de penetración, los colombianos dedicamos diariamente aproximadamente 4 horas a ver televisión, por ello es claro que todos los intentos que se hagan para optimizar la pluralidad en la información serán de gran utilidad para construir una sociedad incluyente, que respete la libertad de expresión y goce de una democracia consolidada.

En este sentido, uno de los esfuerzos que desarrolla tímidamente la pluralidad consagrada en el artículo 75 de la Constitución, se refleja en el artículo 55 de la ley 182 de 1995, a través del cual el legislador aceptado la importancia de transmitir asuntos de interés público bajo puntos de vista contrastantes, señaló:

“...Obligatoriedad de dedicar tiempo de programación a temas de interés público. Los canales nacionales, regionales, zonales y locales de televisión estarán obligados a dedicar un porcentaje de su tiempo a temas de interés público. El cubrimiento de éstos, debe hacerse con criterio de equidad, en el sentido de que, en éste, se provea igualdad de oportunidades para la presentación de puntos de vista contrastantes...”.

Así pues, el mismo legislador acepta la necesidad de contar con interpretaciones diversas sobre los mismos hechos, pues en efecto nada impide que de una u otra forma, la televisión y en general los medios, dando determinado perfil a una noticia, busquen generar la legitimación de un hecho y por qué no, de quién incidió en la realización del mismo. Al respecto esto indican Sebá & González (2004): “...en líneas generales hay una profunda asimetría entre el tratamiento que los medios de comunicación dan a los voceros de las fuerzas dominantes y el que dan a los representante de los sectores subordinados”, además, “...la construcción de la realidad por los medios de comunicación de masas suscita muchos interrogantes, unos tiene que ver con la manera de describir los hechos. Otros, con el sujeto que decide qué se informa y cómo se informa...” (p.24, 27)

Según lo expuesto, es posible afirmar que el propietario de un medio puede, además de informar, buscar promover actitudes en la sociedad. Siendo esto cierto, podemos afirmar que quién maneja un medio como la televisión, tiene la facultad de incidir en gran medida sobre la opinión pública y por ende en la manera como se conduce una colectividad. Para Chomsky (1996), cuando la propaganda que dimana del estado recibe el apoyo de las clases de un nivel cultural elevado y no se permite la desviación de su contenido, estamos en presencia de un consenso cuyo efecto puede ser enorme; Chomsky cita a manera de demostración a Walter Lippmann, importante periodista americano y analista político, quién conforme a sus ensayos admitía que el consenso podía ser fabricado, es decir que podía producir aceptación en la población mediante técnicas de propaganda (p. 139-140), de ahí que por ejemplo al analizar el papel del espectador frente a los medios de masas, Correa (2004), afirme:

“...Los medios masivos de comunicación nos han demostrado que los paradigmas también pueden construirse y transformarse gracias a las imágenes. Dos ejemplos: La adhesión de mucha de la población alemana a la causa nazi gracias a su cine (entre otras acciones de propaganda) y la devaluada imagen que los fumadores hoy tienen en Estados Unidos, después de ser este uno de los países más importantes en producción y consumo de tabaco... Mucha responsabilidad en la transformación de sociedades contemporáneas tienen los medios masivos de comunicación...”. (p. 20)

En síntesis, según lo anterior expuesto, resulta de suma importancia reconocer el poder de persuasión que tiene la televisión, pues es de su esencia comunicarse masivamente basándose en la transmisión de imágenes que no siempre ni necesariamente corresponden a la realidad, sino que más bien pueden servir para reforzar una postura o una predeterminada intención que busca influir sobre la opinión pública. Partiendo de esta afirmación la actividad de medios como la

televisión tiene una trascendencia enorme sobre la sociedad, pues implica un riesgo para el debilitamiento de la democracia, cuando su uso se aleja del propósito de informar de manera veraz e imparcial, tal como lo establece el artículo 20 de nuestra Constitución Política, máxime si no contamos con un escenario que garantice la competencia y la pluralidad de la información (Art. 75 C.P.). No en vano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, es contundente en señalar que una de las violaciones indirectas a la libertad de expresión la constituye la concentración en la propiedad de medios de comunicación de masas, siendo en efecto una de las mayores amenazas para el pluralismo y la diversidad en la información, factor que aunque tiene un carácter sutil y no se percibe tan fácilmente (Zelada, 2004), no por ello deja de ser una realidad que está en crecimiento en el hemisferio y conspira contra la democracia al impedir la expresión diversa de los distintos sectores de la sociedad. (Relatoría. 2003)

2. “LA CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE MEDIOS ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA”. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Y LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA FRENTE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN.

En este capítulo estudiaremos la posición que han tenido los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Constitucional de Colombia, frente al papel que juegan los medios de comunicación en el desarrollo de los derechos de libertad de expresión e información, y cómo no siempre contribuyen a su fortalecimiento, dependiendo de circunstancias particulares como la concentración del mercado de medios o cuando se presenta la censura en algunas de sus formas. Es importante recordar que Colombia hace parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, firmada en San José de Costa Rica en 1969, documento que en su artículo 13 protege la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a través de diferentes medios, instrumento que ha sido el pilar para importantes decisiones y reflexiones, tanto de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Constitucional en Colombia, las cuales, propenden por el desarrollo de la competencia y la pluralidad en la información y es deber para nuestro estado tenerlas en cuenta en sus decisiones a fin de impulsar el fortalecimiento de nuestra democracia.

2.1. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS FRENTE AL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

A través de los pronunciamientos de Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos), podemos apreciar la especial trascendencia que le otorgan al efectivo ejercicio de los derechos a

la libertad de expresión y recibir y transmitir información veraz e imparcial, evitar la censura previa, garantizar la competencia y pluralidad en la información y a la independencia de los medios masivos de comunicación. Asimismo, es posible apreciar que la argumentación de la Corte Constitucional es consonante con los pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, siendo un referente recurrente en los desarrollos internos jurisprudenciales que se han dado sobre la materia.

El derecho a la libertad de expresión, recibir y transmitir información veraz e imparcial, se halla plasmado en el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, de la siguiente manera:

“...Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección...”.

Para definir el alcance de este artículo, resultan cruciales y merecen especial atención, la Opinión Consultiva OC-5 del 13 de noviembre de 1985 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de Principios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la Opinión Consultiva OC-5 del 13 de noviembre de 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aborda en primer lugar los atributos o características que identifican a la libertad de expresión y el derecho a la información, también señala las circunstancias en que pueden presentarse restricciones a estos derechos y las consecuencias que de esta conducta se derivan. Por su parte, la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, creó a su interior, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, oficina con carácter permanente, que busca proteger y promover la libertad de expresión como base para la consolidación de las democracias de sus países miembros. Con este propósito desde el año 1999, esta oficina ha producido en conjunto con otras relatorías para la libertad de expresión, diversas declaraciones en las que se han consignado importantes pautas para el desarrollo de estos derechos, siendo una de las más destacadas la “La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”, a través de la que se reafirma la trascendencia del contenido del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se promueve el respeto por la libertad de expresión en los estados miembros.

Es importante recalcar que tal como lo señala la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva 05 de 1985, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, basados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, va más allá de la posibilidad de expresar su propio pensamiento y abarca la libertad del individuo de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de otros; por ello esta libertad implica un proceso de conocimiento en el que el individuo indaga y divulga ideas e información de diverso origen.

Igualmente, advierte la Corte, que la libertad de expresión y el derecho a la información, no se pueden desligar, pues tal como lo expone en la Opinión Consultiva en comento, “...cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a "recibir" informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales...”. Así pues, se señala que la libertad de expresión además de ser un derecho

individual es a la vez un derecho colectivo. Bajo esta reflexión, tenemos entonces que este es un derecho de doble vía, situación a la que se ha referido en repetidas ocasiones la Corte Constitucional Colombiana.

2.1.1. PROSCRIPCIÓN DE LA CENSURA PREVIA

Para la Corte Interamericana tal como lo indica en la Opinión Consultiva 05 de 1985, no tendría sentido instituir la censura previa so pretexto de que determinado individuo según su arbitrio elimine la información que considere falsa. Por ello desde todo punto de vista, la censura previa es incompatible con la libertad de expresión y el derecho a recibir información. No obstante si es válido un control posterior, pues en caso de que haya habido un abuso de la libertad de expresión, este será el fundamento de responsabilidad para el emisor de la información. Igualmente recalca, que tal como lo establece la Convención, las responsabilidades deben estar expresamente fijadas y delimitadas por la ley y ser necesarias para asegurar: "...a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas...".

En estos casos, explica la corte, que para que se configure la responsabilidad del emisor debe darse:

"...

- a) La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas,
- b) La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley,
- c) La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y
- d) Que esas causales de responsabilidad sean " necesarias para asegurar " los mencionados fines

...".

Igualmente, la Corte se refiere a las dos excepciones a la censura previa preceptuadas en la Convención que hacen referencia a espectáculos públicos, con el fin de regular el acceso para salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes y la difusión de propaganda en favor de la guerra, el odio nacional, racial o religioso que incite a la violencia.

También la Corte Interamericana advierte la posibilidad de que soterradamente se presente la violación a la libertad de expresión o divulgación y recepción de información, por ello advierte taxativamente que la Convención estableció la prohibición para que se restrinjan estos derechos valiéndose de “medios indirectos”; que serían controles oficiales o particulares sobre el papel para los periódicos, frecuencias radioeléctricas, enceres o aparatos utilizados para el libre flujo de información e ideas.

Conforme a lo expuesto, puede concluirse que para la Corte Interamericana el derecho a la libertad de expresión e información, no es absoluto, ya que admite algunas excepciones y un control posterior de manera general, pero con la intensión de que estas restricciones afecten de la manera más tenue el flujo libre de ideas e información, de ahí que precisamente se trate de delimitar en la mayor medida posible dichas excepciones.

Igualmente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión a través de la declaración de principios sobre libertad de expresión, consigna que debe prohibirse cualquier forma de censura previa, presiones sobre opiniones o informaciones difundidas a través de cualquier medio o creación de obstáculos de cualquier naturaleza, así como condicionamientos basados en la oportunidad, veracidad o imparcialidad.

2.1.2. COMPETENCIA Y PLURALIDAD EN LA INFORMACIÓN

Frente a este aspecto la Corte Interamericana manifiesta a través de la Opinión Consultiva 05 de 1985, que los medios de comunicación social son el soporte sobre el cual se desarrolla el derecho a la libertad de expresión e información, por tanto estos debe ser abiertos a todas las personas y exentos de cualquier intensión de discriminación. La corte reflexiona sobre este punto, para señalar que de no ser así, los medios de comunicación se convierten en todo lo contrario, facilitando ya no la libertad de expresión sino su restricción. Situación que puede presentarse en presencia de monopolios u oligopolios, siendo por tanto necesaria la prohibición de cualquier forma que estos adopten y propende por ende, por la pluralidad de medios. Como veremos más adelante, esta argumentación de la Corte Interamericana se encuentra en armonía con los pronunciamientos de la Corte Constitucional la cual se ha encargado de adaptarlos y desarrollarlos dentro de nuestra realidad.

Puntualmente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión a través de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en referencia a los monopolios y formas similares como los oligopolios en los medios de comunicación, señala que los estados deben regirse por leyes antimonopolio, pues estos “conspiran contra la democracia”, ya que restringen la pluralidad y diversidad, situación que se encuentra en consonancia con el artículo 75 de nuestra Constitución.

2.1.3. DEMOCRACIA

La Corte Interamericana reconoce en la libertad de expresión, una piedra angular para la existencia misma de una sociedad democrática, pues gracias a ella es posible la formación de la opinión pública; en este sentido es necesario que dentro de una sociedad organizada se garantice el libre flujo de ideas, información y noticias. Esto permite un debate libre y el desarrollo de todos aquellos grupos interesados en influir en el poder, con cabida para la oposición o disidencia. Esta posición se encuentra plenamente identificada con los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional colombiana tal como lo veremos en esta misma investigación.

Para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión; la libertad de expresión es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática, tal como lo informa en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (2000) y pasa a explicar que: "...En la sociedad actual, los medios de comunicación masiva, como la televisión, radio y prensa, tienen un innegable poder en la formación cultural, política, religiosa, etc. de todos los habitantes. Si estos medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por sólo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas, ejercen el control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas. Esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia...".

Igualmente en el informe sobre concentración de medios de comunicación en los países miembros del año 2004, se afirma que han recibido continuas denuncias de prácticas

monopolísticas y oligopólicas, sobre las que de manera directa menciona que si los medios son controlados por un número reducido de individuos o sectores de la sociedad, se genera una carencia de pluralidad que impide el funcionamiento de la democracia, misma que requiere de debate y discusión. (Zelada, 2004)

2.2. LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA FRENTE AL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN TELEVISIÓN.

De acuerdo con la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional, podemos apreciar la existencia de diversos ejes temáticos que relacionan la libertad de expresión e información con la televisión. Estos ejes, que no han sufrido mayores variaciones, evidencian que debe existir una armonía entre los mencionados derechos fundamentales y el manejo que se le dé a tecnologías como la televisión. Según la Corte, esta intermediación requiere de elementos claves; como la responsabilidad social, la prohibición de la censura previa, la competencia y la pluralidad en la información. Asimismo reconoce la influencia de los medios masivos sobre la democracia y el poder de penetración de la televisión.

2.2.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Haciendo un recorrido de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de televisión y medios de comunicación nos encontramos con el desarrollo del concepto de responsabilidad social, a través de dos parámetros principales. En el primero, el sentido de la responsabilidad social se orienta a que los medios utilicen su libertad al servicio del interés general, para que no se distorsione la realidad con la transmisión de información que favorezca a determinados grupos

de la sociedad, esta posición se describe claramente en la sentencia T-048 del 15 de febrero de 1993, (M.P. Fabio Morón Díaz).

El segundo alcance que se le da a responsabilidad social de los operadores, tiene que ver con la influencia que ejercen los medios, sobre todo la televisión, en la formación de los individuos especialmente los niños y los adolescentes, este es el caso por ejemplo de la sentencia T-534 del 30 de noviembre de 1994, (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en la que se señala la existencia de una misión o labor formativa a cargo de los medios de comunicación; en esta providencia se cuestiona un mensaje televisivo en el que se previene a la población de la práctica del homosexualismo pues se relaciona con el contagio del virus del SIDA; lo cual para la corte no resulta ser acertado, ya que el riesgo de esta enfermedad para la sociedad tiene diversos orígenes y no es un problema que atañe de manera exclusiva a un sector de la sociedad. De manera complementaria en la sentencia C-350 del 29 de julio de 1997, (M.P. Fabio Morón Díaz), advierte que los medios de comunicación no solo deben informar, sino también educar y su labor debe realizarse con profesionalismo ya que de sobrepasarse los límites éticos, puede caerse en la manipulación.

Finalmente, en la sentencia T-439 del 7 de julio de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), manifiesta esta alta corporación, que la responsabilidad social de los medios implica para el emisor de la información, la realización de un ejercicio de procesamiento, que examine si con la divulgación de la información se vulnerarían derechos fundamentales como el buen nombre, la intimidad o la dignidad, elementos estos que vistos en conjunto nos permiten inferir la existencia de un deber de responsabilidad sobre lo que transmiten medios masivos como la televisión.

2.2.2. PROHIBICIÓN DE LA CENSURA PREVIA

De la producción jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el tema, empezaremos por referirnos a aquella que explica los alcances jurídicos de la prohibición. Así las cosas, para la corte existen diversas formas en las que puede presentarse, en primer lugar estaría su forma más directa y por ello la más evidente, que se presenta, cuando se obliga a alguien a publicar informaciones o por el contrario a prohibirle ejercer su libertad de expresión o publicar información (Sentencia T-484 del 2 de noviembre de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía). La sentencia C-010 del 19 de enero de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) continuando con esta misma línea interpretativa, afirma que está prohibida, “...la necesidad de obtener anticipadamente, de parte de los censores, una autorización para publicar ciertos contenidos...”.

Enseguida hallamos la forma subrepticia de ejercer la censura, misma que ya la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos la había advertido en su artículo 13 numeral 3, al prohibir cualquier forma indirecta de control o controles oficiales que busquen impedir el libre flujo de ideas, opiniones o información, “...tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Esta posición es compartida en diversos fallos de la Corte Constitucional, entre ellos la sentencia T-391 del 22 de mayo de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)

Continuando con la definición de los alcances que tiene la prohibición de la censura, la Corte Constitucional a través de sentencias como la C-592-12 del 25 de julio de 2012 (M.P. Jorge Iván

Palacio Palacio), es tajante al reconocer que si bien existen abusos de los derechos a la libertad de expresión e información, la censura previa no es la medida adecuada para atacarlos, sino más bien, fundamento de responsabilidad para el emisor de la información, posición que se halla en total consonancia con la posición fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 05 de 1985.

De otra parte el fallo T-391 del 22 de mayo de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), plantea las excepciones a la censura previa recogiendo así lo dispuesto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, estas son: La posibilidad de control sobre el acceso a espectáculos públicos para proteger la moral de la infancia y adolescencia, la prohibición de la propaganda de la guerra y la apología del odio, la violencia y el delito, la prohibición de la pornografía infantil y la prohibición de la instigación pública y directa al genocidio.

Así las cosas, las demás formas de abuso de los derechos a la libertad de expresión e información, como la falta de veracidad, atentar contra la honra y el buen nombre o intromisiones en la intimidad de las personas, no pueden ser objeto de censura previa sino que deben someterse a un control posterior, tal como lo explica claramente la sentencia T-1037 del 14 de diciembre de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), providencia en la que además se enfatiza que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, que sus límites como todo ejercicio de un derecho lleva implícita responsabilidades, y que en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las restricciones que se hagan deben estar previstas taxativamente en una norma legal y deben buscar que no se irrespete a los demás, así como preservar la seguridad, salud y moral públicas.

2.2.3. COMPETENCIA, PLURALIDAD EN LA INFORMACIÓN Y DEMOCRACIA

Las garantías de competencia y pluralidad en la información se encuentran establecidas en el artículo 75 de la carta política; disposición que le da al estado la facultad no solo de gestionar el espectro electromagnético, sino también, taxativamente de intervenirlo para evitar las prácticas monopolísticas y de esta manera poder garantizar la competencia y la pluralidad en la información. Al respecto es importante aclarar que si bien la televisión puede llegar a los hogares a través de un cable, necesariamente hace uso en algún momento del espectro electromagnético para transportar su señal, por ello le es aplicable el artículo en cuestión, tal como expresamente reconoce la Corte Constitucional, en sentencia C-093 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.

Ahora bien, en cuanto a las definiciones que constitucionalmente se le han dado a la protección de la competencia y la pluralidad, debemos empezar por explicar que para la corte, existen dos maneras diferentes de apreciarla. La primera de ellas hace referencia a la libertad de competencia dentro de una economía de mercado. En la sentencia C-815 del 2 de agosto de 2001, (M.P. Rodrigo Escobar Gil) la Corte Constitucional explica que la protección a la libre competencia: "...debe impulsar o promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores y le permita al estado evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en el sistema económico competitivo....". Como podemos apreciar esta definición guarda estrecha relación con el artículo 333 de la Carta Política, que instituye para nuestro estado el respeto por la libre competencia; pero otro aspecto que va más allá del mercado, en relación con la protección de la competencia y la pluralidad, lo trae el artículo 75 ibídem, que en últimas lleva a concluir que la televisión, como también los

demás medios de comunicación que hacen uso del espectro electromagnético, no puede ser tratados como una simple mercancía o bien de consumo.

Tal como la misma Corte Constitucional lo explica, la televisión es una tecnología que hace parte fundamental de la formación de la opinión pública y por ende del fortalecimiento de la democracia (Sentencia C-497 de 1995 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). En este orden de ideas, la garantía de la competencia así como la pluralidad adquieren matices adicionales a los de la dinámica del mercado.

La competencia, vista entonces desde la óptica de los medios de masas, se conecta con el reconocimiento efectivo del derecho a fundar medios masivos de comunicación, a la igualdad de oportunidades para su acceso y la pluralidad en la información. Estos elementos se hallan incluidos en su integridad en nuestra Carta Política y su relación con la competencia puede apreciarse en sentencias como la C-357 del 29 de julio de 1997, (M.P. Fabio Morón Díaz).

En cuanto a la manera como se materializa el poder de intervención del estado sobre el espectro electromagnético, la sentencia C-654 del 5 de agosto de 2003, (M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernandez) nos dice que el legislador se encuentra facultado constitucionalmente para establecer mecanismos que determinen la manera como se fundan y desarrollan los operadores, sin embargo sentencias como C-815 del 2 de agosto de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil), van más allá, indicando que el fin de intervención del estado en la gestión del espectro electromagnético es lograr el pluralismo informativo: "...la existencia y coexistencia de distintos operadores de televisión que puedan llevar a los usuarios diferentes contenidos que sean reflejo

de la realidad circundante ... multiplicidad de puntos de vista en los contenidos de los medios de comunicación ya sea en términos políticos, étnicos, religiosos, culturales, etc. de modo que la inmensa variedad de realidades sociales encuentre su lugar y representación en los medios de comunicación...”.

De la correlación entre competencia y pluralidad, se infiere entonces que la competencia resulta ser directamente proporcional a la pluralidad en la información y, de esta relación dependerá el proceso de formación de la opinión pública.

Así, gracias a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se va tejiendo la importancia de la competencia y la pluralidad en la información. En tanto se cuente con pluralidad, la opinión pública estará mejor fundamentada y así mismo la sociedad será más libre en la toma de sus decisiones. Para la Corte, el cumplimiento de las garantías de competencia y pluralidad en la información, permite realizar los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información y el hecho de contar con una democracia fuerte, en la que prime el debate de las ideas:

“...La televisión, sobra decirlo, ocupa un lugar central en el proceso comunicativo social. La libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado, en una escala masiva, dependen del soporte que les brinda el medio de comunicación. La opinión pública, no es ajena a las ideas e intereses que se movilizan a través de la televisión. Por consiguiente, el tamaño y la profundidad de la democracia, en cierta medida resultan afectados por la libertad de acceso y el pluralismo que caracterice a la televisión y ellas, sin lugar a dudas, pueden resentirse cuando el medio se convierte en canal propagandístico de la mayoría política o, más grave aún, de los grupos económicos dominantes...”.

Este argumento aparece por primera vez en la sentencia como la C-497 del 7 de noviembre de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y ha sido reiterado y citado textualmente en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional, como por ejemplo en los fallos: C-654 del 5 de agosto de 2003, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernandez; C-170-2012, de 7 de marzo. M.P Jorge Iván Palacio Palacio y C-580 del 28 de agosto de 2013 Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otros.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional al abordar el análisis de la competencia y la pluralidad en la información, encuentra una indiscutible relación de estas garantías y los derechos a la libertad de expresión e información, y ellos juntos los describe como dinamizadores imprescindibles de la democracia. Al tener entonces, un estado que promueva la competencia, optimizará la pluralidad en la información, la libertad de expresión y en últimas se terminará fortaleciendo la democracia, gracias a que medios como la televisión harán parte de un proceso de inclusión en el que es posible compartir y debatir informaciones e ideas de manera reflexiva desde todos los sectores de la sociedad (C-010 del 19 de enero de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-327 del 10 de mayo de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla). Por estas mismas razones en las que el debate social se fortalece, si se evita o se rezaga el libre flujo de ideas, medios como la televisión se convierten en herramientas para grupos privilegiados que legitiman o deslegitiman los poderes constituidos. (C-350-97, Julio 29 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz).

Finalmente en materia institucional la sentencia C-580 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, enfatiza que la Autoridad Nacional de Televisión –ANTV tiene dentro de sus funciones

principales, garantizar la competencia y el pluralismo informativo tal como lo ordenan la Constitución y la ley. Consideramos que este pronunciamiento se queda corto frente a los alcances constitucionales que trae la Carta Política, pues es el legislador quién traza la política que afecta al medio tal como lo ordena el acto legislativo 02 de 2011, disposición que pendiente de cumplimiento, tal como se explica adelante en esta misma investigación, mientras esto no suceda la ANTV debe guiarse por la política de televisión señalada en 1995 con la ley 182, bajo otro estado de la tecnología, de los medios y de nuestra realidad nacional.

2.2.4. PODER DE PENETRACIÓN DE LA TELEVISIÓN SOBRE LA SOCIEDAD.

A pesar de que en el presente estemos presenciando un profundo cambio tecnológico que permite no solo a la televisión, sino también a otros medios, ser vistos a través de diferentes terminales o aparatos; que exista la interactividad entre el transmisor y el receptor y un claro protagonismo de las redes sociales; para la Corte Constitucional, la televisión continúa teniendo gran influencia sobre nuestra sociedad. Esta posición es posible apreciarla en la sentencia C-170 del 7 de marzo 2012, con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, en la que se indica:

“...La Corte reconoce que, al margen de los sorprendentes avances tecnológicos en la materia, la televisión continúa siendo uno de los medios masivos de comunicación con mayor grado de penetración en la sociedad contemporánea y en particular en el foro colombiano, al menos en las circunstancias actuales. Su relevancia en el proceso comunicativo es tal que tiene la potencialidad de incidir en la cotidianidad, en la formación de la opinión pública e incluso impactar de manera positiva o negativa en los procesos de “consolidación o debilitamiento de las democracias...”.

Esta misma línea interpretativa de la Corte Constitucional se ha mantenido desde sus primeros fallos sobre el tema, atribuyéndole a la televisión una ostensible influencia en los planos individual, familiar, social y político. La Corte parte en primer lugar de reconocer que en el mundo actual la comunicación se desarrolla en buena parte a través de intermediarios, es decir medios de comunicación como la televisión, es así como en la sentencia C-350 del 29 de julio de 1997 MP. Fabio Morón Díaz, se afirma que la televisión hace parte de un nuevo paradigma de vida a través del que se cimienta la base de la cultura, siendo clave la capacidad que tiene para orientar la toma de decisiones desde lo político hasta los hábitos de consumo.

Otro importante aspecto radica en reconocer el poder de disuasión de la televisión. En sus sentencias la Corte llama la atención sobre como su manejo debe estar guiado por el interés general y de manera independiente, para que ningún grupo pueda controlarlo y no se convierta en el vocero del mismo grupo, corriente social o política o un mismo tipo de intereses. Esta posición se encuentra en sentencias como la C-497 del 7 de noviembre de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada en fallos como el C-654 del 5 de agosto de 2003, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernandez y el C-1172 del 8 de noviembre de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

Partiendo de la sentencia C-350 del 29 de julio de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz, se describe por qué el carácter tan especial de la televisión por encima de otros medios de comunicación masiva, en este fallo se enseña que esta tecnología transmite información en extremo concisa, fragmentada con la que además se “bombardea” al espectador, esta interpretación es reiterada en fallos como el T-1000 del 3 de agosto de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

De manera complementaria, siguiendo la misma concepción conforme a la cual la televisión no puede ser manipulada por ningún sector de la sociedad, la sentencia C-1153 del 11 de noviembre de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, señala los principales parámetros que deben guiar la divulgación a través de medios de comunicación en época de contienda electoral, estos lineamientos tienen como común denominador la necesidad de dotar de igualdad de condiciones el acceso a la publicidad y que exista un tratamiento objetivo y equitativo entre los candidatos; este equilibrio informativo cobra relevancia en esta sentencia debido a la posible presencia de un candidato presidente, pues podría desbalancear el tratamiento noticioso si se le da más protagonismo frente a los demás candidatos. En esta misma medida, los espacios electorales de publicidad deben adjudicarse en las mismas condiciones a todos, e igualmente ningún operador puede restringir su publicidad al candidato o candidatos de su preferencia sino por el contrario darles a todos las mismas condiciones comerciales para su utilización. Esta posición es reiterada en la sentencia C-490 del 23 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se indica que efectivamente el carácter equitativo obedece al carácter público que tiene el espectro electromagnético.

Finalmente en la sentencia C-580 del 28 de agosto de 2013, termina reforzándose lo que ha sido una constante para la Corte Constitucional reconociendo el poder de persuasión de la televisión sobre nuestra sociedad, argumentación que retoma las sentencias C-497 de 1995, C-350 de 1997 y C-1001 de 2007 y C-170 de 2012, mismas en las que se concibe a la televisión como el soporte para el derecho a informar a recibir información veraz e imparcial, la democracia y se insiste en que es el medio con mayor poder de penetración en nuestra sociedad,

además en la sentencia C-170 de 2012 se añade una característica derivada de su poder de persuasión, referente a la necesidad de autonomía para su manejo por parte de la entidad que la administre, a fin de que se conserve como un bien social y evite la injerencia de sectores económicos, sociales y políticos influyentes. En este caso se hace alusión a la autonomía que se había dispuesto en la Constitución para la extinta Comisión de Televisión, pero que según este fallo no era un rasgo definitorio de la Carta Política ni tampoco era necesario mantenerlo en la media que la autonomía debe ser un rasgo que irradie a todo el sector público.

En síntesis, de los pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, se infiere en primer lugar que los medios de comunicación son en las sociedades actuales, un eslabón imprescindible para la realización de la libertad de opinión, del derecho a la información y la democracia. Por ello estos organismos advierten enfáticamente, que de no contar con un mercado de medios plural y en competencia, su uso desembocará en todo lo contrario, empobreciendo el libre flujo de ideas y en general el debate democrático; presupuesto al que estamos expuestos los colombianos principalmente por tener un mercado de la televisión nacional acaparado por solo dos agentes.

3. POLITIZACIÓN DE LA PANTALLA. EL DEVENIR HISTÓRICO DE NUESTRA TELEVISIÓN Y LA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA CREAR COMPETENCIA Y PLURALIDAD.

3.1. DE ROJAS PINILLA A LA CONSTITUYENTE DEL 1991.

La televisión nace en Colombia como un apéndice directo del ejecutivo, precisamente, la primera imagen transmitida el 13 de junio de 1954 fue la del Presidente de la República, General Gustavo Rojas Pinilla, hablando desde el Palacio Presidencial en una transmisión que duraría 3 horas 45 minutos (Acosta, 2006). Este evento empezaría a mostrar las posibilidades del nuevo medio como efectivo aparato propagandístico; de ahí el interés sucesivo de los gobiernos de turno por su control y la necesidad de abrirlo, a diferentes emisores de información, en un ejercicio de pluralidad y promoción de la competencia tal como lo establece la actual constitución.

Según lo relata Carillo & Montaña (2006), la televisión en Colombia se inauguró como parte del proyecto populista de Rojas Pinilla, quien combinó los proyectos educativos y la promoción en los medios para fabricar aceptación y consenso entre la sociedad:

“...Finalmente, el 13 de junio de 1954 se inauguró la televisión en Colombia como parte del proyecto populista de Rojas Pinilla, quien buscó desde el mismo momento de su posesión una efectiva aparición de su gobierno ante los medios, pero también del programa educativo que perseguía la instrumentalización de amplios sectores obreros y campesinos, lo que redundaría, finalmente, en la culminación de un proyecto nacional basado en la religión católica, la raza y el idioma...”. (p.139)

Este fenómeno de toma del medio por los gobiernos, tiene su origen en diversas fuentes; en materia económica fue crucial el influjo de las teorías del estado de bienestar muy en auge en el mundo por aquella época. Así, a la llegada de la televisión al país, la mayoría de los países habían optado por mercados controlados por el estado; las ideas de Keynes sobre planificación estatal de la economía tenían plena vigencia, adquiriendo principal importancia luego de la segunda guerra mundial (Morell, 2002). Esto hizo que, llegada la televisión al país, el intervencionismo de estado o el llamado estado benefactor, fuera la corriente económica predominante. Ideología sobre la cual el estado controlaría la televisión, adjudicándole desde allí la categoría de servicio público que aún subsiste.

Otra fuente para que el estado desde el primer momento se interesara por el control de la televisión, se encuentra en la experiencia ganada a través de otros medios; prensa, radio y sobre todo el cine debido a su cercanía técnica. Este último tendría especial relevancia debido a referentes históricos como la segunda guerra mundial, en la que se habían demostrado su efectividad a fin de promover el régimen nazi dentro de la sociedad alemana. Cine, libros, prensa y radio, difundían campañas antisemitas y a la vez promovían el ascenso de su líder. A la directora cinematográfica Leni Riefenstahl, se le atribuye el uso innovador de diversas técnicas como los fundidos, que le daban un aire de magnificencia a sus documentales, los contrapicados que engrandecían la figura del líder e incluso la utilización de recursos atribuidos a su propia autoría, como los planos en cámara lenta que ayudaron a consolidar al cine como un eficaz medio de persuasión. Estos recursos técnicos a la postre serían llevados a la televisión dados su demostrados resultados. De Riefenstahl se destacaron notoriamente los documentales, la Trilogía

de Núremberg y Olimpia, ambos con fuerte contenido político, a pesar de que el segundo se encargó de cubrir por primera vez unos juegos olímpicos.

Pero yendo incluso más hacia atrás, encontramos referentes de este orden ya desde la década de los 20 del siglo pasado. Fue así como Edward Bernays, utilizando las investigaciones de su tío Freud, promovió el concepto de “Relaciones Públicas”, demostrando su efectividad para convencer a la sociedad a través de la utilización de los medios de masas y la publicidad. Sobre el particular esto decía:

“...El cine estadounidense representa el más importante vehículo inconsciente de propaganda en el mundo. Es un gran distribuidor de ideas y opiniones. Las películas pueden estandarizar las ideas y los hábitos de la nación en la medida en que las películas están diseñadas para satisfacer las demandas del mercado...”. (Bernays, 2008, p. 192).

En Colombia por su parte, el uso del cine y luego de la televisión refleja también la marcada tendencia del estado, o más bien por los gobiernos de turno, para utilizarlo como instrumento para promover sus políticas y buscar legitimidad en el pueblo. Este manejo se dio inicialmente a través de los noticieros que se proyectaban antes de cada función cinematográfica y los difundidos desde inicio de la televisión, que si bien se identificaban como noticieros o programas educativos, tenían una marcada tendencia oficialista (Carrillo & Montaña, 2006).

Así, tomando como referente al cine, el cual ya se había utilizado tanto en campañas propagandísticas en la Alemania nazi, como en proyectos educativos nacionales que tenían ciertos tintes legitimadores sobre el grupo político imperante; se va ligando el manejo de la

televisión a un asunto de carácter gubernamental, lo que propició su categorización desde su llegada al país como un “servicio público”, lo que a la postre determinó su naturaleza como si se tratase de una institución oficial y no de un bien sobre la cual debía propiciarse su pluralidad e independencia. De este fenómeno dio cuenta precisamente mucho tiempo después el ex constituyente Carlos Lemos, quien en 1991 en una de sus intervenciones ante la Asamblea Nacional Constituyente, afirmó:

“...Resulta señor presidente que la televisión nació en Colombia en 1954, cuando el país estaba regido por un régimen militar... la televisión nació como un ente oficial inclusive como una dependencia de la radio nacional, curiosamente cuando ese régimen terminó y empezaron los regímenes del frente nacional todas las libertades fueron restauradas menos esta, el estado siguió apoderado de los canales de televisión...”.

Una vez superada la etapa inicial de expansión de aparatos el influjo de los gobiernos sobre el sector se mantuvo a través de dependencias gubernamentales como la Televisora Nacional, que inició haciendo parte de la Oficina de Información y Prensa del Estado -ODIPE mediante decreto 0101 del 19 de enero de 1955; luego, durante el Frente Nacional, como una dependencia del Ministerio de Comunicaciones a través del Decreto 1566 del 30 de junio de 1960 y posteriormente, como un establecimiento público bajo el Ministerio de Comunicaciones (Decreto 1635 de 1960). En 1963 con el decreto 3267 se crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión y en 1985 con la ley 42 se crea el Consejo Nacional de Televisión y la Comisión para la Vigilancia de la Televisión. (Vizcaíno, 2005).

Para finales de los años 70 cada una de las fuerza políticas más influyentes tenía su propio noticiero: "...Cada vez se hizo más frecuente referirse a los informativos como "el noticiero de López" (Noticiero de las 7), "el de Pastrana" (TV Hoy), "el de Álvaro Gómez" (24 Horas), "el de Turbay" (Criptón) etc...". (Ospina & Herrera, 2004).

Este manejo politizado encontró en el sistema mixto su hábitat ideal. Si bien la programación comercial la realizaban los empresarios, ellos debían recurrir al estado para la utilización tanto de la red como de casi la totalidad de los estudios de producción. Esto, sumado a que en cada gobierno estaba concentrada la administración, regulación, otorgamiento de licencias y producción educativa y cultural, permitió configurar una verdadera situación de subordinación de los operadores, de ahí que en muchos casos los espacios informativos fueran señalados como los voceros de los gobiernos instaurados en el poder (Ospina & Herrera, 2005).

Por otra parte no debemos pasar de vista que esta excesiva influencia del gobierno sobre los medios y en especial sobre la televisión, facilitó los nefastos eventos de censura vividos durante la toma del palacio de justicia. Según el Informe Final de la llamada Comisión de la Verdad, durante la toma del Palacio de Justicia, la Ministra de Comunicaciones adoptó varias decisiones que impidieron la transmisión en directo de los hechos, conllevando el bloqueo de la noticia tanto para los operadores públicos como privados, en lo que ha sido considerado como el evento de mayor censura vivido en nuestro país. (Gómez, Herrera & Pinilla, 2010)

Entre las instrucciones impartidas se destaca por ejemplo la no autorización del cambio de programación en Inravisión para así poder transmitir lo que estaba sucediendo y la emisión de un

télex en el que se indicaba: “El ministerio de comunicaciones prohíbe terminantemente la transmisión de entrevistas y llamadas a magistrados puesto que ello dificulta cualquier operación tendiente a salvaguardar la vida de las personas que todavía se encuentran en el palacio de justicia...” (Gómez, et al., 2010). También en dicho informe se relata como la ministra de comunicaciones contacta telefónicamente a los directores de noticias de RCN Radio y Caracol Radio a fin de que salieran del aire.

Lo propio ocurrió con la televisión, debe recordarse que también por disposición ministerial se decide transmitir el partido Millonarios-Unión Magdalena. El productor de Televisión Jairo Quintero, quién estuvo a cargo de la transmisión deportiva, señaló al respecto para el periódico El Heraldó: “...Recuerdo que fue por la tarde cuando de pronto llegaron unos representantes del Ministerio de Comunicaciones diciéndonos que era obligación ir a transmitir el partido de Millonarios Unión Magdalena, para distraer un poco la atención nacional...” (McCausland, 2012).

Siendo históricamente más los desaciertos y el balance negativo respecto del fortalecimiento de la competencia y pluralidad en la información en materia de televisión, encontramos que para el año 1995 cuando comienza a materializarse un nuevo modelo, este era el panorama que nos ofrecía la pantalla colombiana:

- Inexistencia de operadores privados para el manejo de canales nacionales.
- Dos canales comerciales, distribuidos en espacios de entretenimiento y noticias, programación característica del sistema mixto.

-Un canal cultural.

-Escaso cubrimiento de la televisión por suscripción.

-Cuatro canales regionales, cuya audiencia y calidad de contenidos se ha caracterizado siempre por ser marginal.

También es importante mencionar, que este pobre panorama dibujó un escenario poco estimulante para el desarrollo del sector, ya que contar con sólo dos canales comerciales divididos en espacios no permitía bajo ningún aspecto inversiones importantes y a largo plazo. No obstante, dentro de este limitado escenario, la división en espacios tuvo un efecto que precariamente nos acercó al pluralismo informativo, a través de la existencia de 10 noticieros de diferente origen; 6 entre semana y 4 los fines de semana, pero sin desconocer que estos espacios de noticias adolecieron siempre de ser señalados por su adjudicación de manera politizada. (Yances, 2003).

Cerrando este ciclo en el manejo de la televisión colombiana encontramos la ley 42 de 1985, norma que creó una serie de instituciones interrelacionadas como el Consejo Nacional de Televisión que se encargaba de tomar decisiones sobre programación, formular políticas y adjudicar espacios; la Comisión para la Vigilancia de la Televisión, encargada de tramitar las quejas y reclamos, y la Junta Administradora, con funciones eminentemente administrativas. Esta ley no tuvo la suficiente fuerza para impulsar el sector, quedándose en el sistema mixto e incluso permitiendo nuevamente la adjudicación de los espacios noticiosos con carácter político (Ramírez y Arbeláez, 1993). Así las cosas continuó haciéndose notoria la falta de independencia respecto del ejecutivo debido a la integración de sus cuerpos directivos con personas ligadas a

los gobiernos de turno, por ejemplo la junta directiva del Consejo Nacional de Televisión se encontraba conformada por el ministro de comunicaciones, el director de Colcultura, un representante del gobierno y dos representantes del congreso. Si bien fue fruto de la ley 42 de 1985, que buscó hacer más participativa la televisión, lo cierto es que fue objeto de muchas críticas que la acusaban de falta real de representación de la comunidad lo afectaba la imparcialidad y transparencia en las adjudicaciones, tal como por ejemplo lo indicó la Revista Semana el 1 de junio de 1987, así:

“...Pero aun cuando se ha dicho todo esto, y muchas cosas más, ciertas y escandalosas hasta los tuétanos nadie ha tocado el verdadero motivo por el cual falló el experimento de la ley 42. La clave está en un error de interpretación. Cuando se habló de que los miembros del Consejo de T.V. debían representar a la "comunidad" nadie cayó en cuenta de que se trataba de la comunidad de los televidentes, y no de la comunidad de los aspirantes a la adjudicación. Así, los nueve integrantes del Consejo de T.V. terminaron definiendo sus intereses particulares y el de sus programadoras amigas...”.

Y aunque no exigir calidades mínimas a los miembros directivos, continuar con el sistema mixto o discutirse la neutralidad en las adjudicaciones, entre otras razones, mostraban los signos del fracaso, el principal factor de desilusión vino a aflorar con la censura en la transmisión de la toma del palacio de justicia, consecuencia de la mal lograda independencia del ejecutivo.

Los ex constituyentes Alberto Zalamea, Darío Valencia, Álvaro Leyva, Iván Marulanda, Carlos Lemos, Rodrigo Lloreda, Horacio Serpa y María Teresa Herrán, entre otros, expusieron dentro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, las deficiencias en la administración de la televisión hasta ese momento, en algunos casos ya fuera por su politización, y en otros, por el

predominio de los grupos económicos. Por ello manifestaron su preocupación por conseguir una oferta televisiva con mayor número de programadores, en la que se evitara la concentración por contadas empresas propietarias de medios de comunicación, buscando así una democracia más fuerte y consolidada. Destacamos a continuación algunos apartes de algunas de esas intervenciones tomadas de la transcripción de las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, en las que se discutió el contenido de los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución Política de Colombia:

- Alberto Zalamea, (2 de mayo de 1991):

“...Aquí se hace toda una requisitoria contra los monopolios que en este momento estarían dominando la televisión y contra eso es que precisamente queremos abrir canales para que todo el mundo pueda intervenir no que se mantenga como se pretende la dictadura de los actuales dueños de las concesiones por doce años. Que es lo que va a pasar entonces señor presidente, estamos legislando para unos pocos o contra unos pocos estamos condenando al país al atraso, al atraso tecnológico, estamos institucionalizando una serie de privilegios absolutamente indebidos, estamos enterrando la democracia de la televisión...”.

Álvaro Leyva, (25 de abril de 1991):

“...Esta es una fotocopia de “Semana” marzo 12 de 1991, se titula: “las parabólicas en la mira”, y en uno de los apartes dice lo siguiente: “Lo cierto es que todo este debate ha caído en territorios políticos, por la coincidencia de que la junta directiva de T.V. Cable, en Bogotá, parece la junta directiva de Colombia, allá están representados: Caracol, RCN, el Tiempo, TV Hoy, RTI. Esto significa una manguala de ex presidentes, grupos económicos y medios de comunicación, como no se ha visto nunca... este hecho ha llevado a que la discusión... se centre en un debate político sobre concentración de poder...”.

- Carlos Lemos, (6 de junio 1991):

“...Todos los países han ido liberalizando y privatizando la televisión con muy buenos resultados... hacia allá van naciones que están regidas por regímenes socialistas como España, o como ocurrió en el Perú, bajo Alan García en donde entró el sistema de la televisión privada y ya hay en el Perú cerca de siete canales privados de televisión...”.

- Rodrigo Lloreda, (6 junio 1991):

“...Es muy importante ligar este tema de la televisión y de los medios de comunicación con el tema de las garantías políticas porque la verdad es que no hay una interrelación adecuada y satisfactoria, la experiencia y yo la viví, en el proceso electoral de la campaña presidencial pasada es que sólo 25 días antes de terminar el proceso, cuando ya habían matado tres candidatos presidenciales, el gobierno de aquel entonces accedió a que hubiera acceso a los medios de comunicación del estado; hubo un proceso discriminatorio evidente, hubo casi yo diría un delito de opinión yo llevé las estadísticas durante un año, en mi condición de candidato y la comparación con los candidatos oficiales del partido de gobierno, en la televisión, era de diez a uno...yo creo que esto hay que corregirlo y hay que corregirlo desde aquí y naturalmente la Constitución no puede pretender reglamentar todo, pero debe salir de aquí normas, que puedan preservar el espíritu de competencia y la garantía a que tienen derecho todas las personas que intervienen en los procesos democráticos...”.

En síntesis, desde el comienzo de la televisión en Colombia y hasta la llegada de la Constitución de 1991, se observa con claridad la falta de independencia y desarrollo del medio, primordialmente por intereses políticos que se valen de su estatalización para lograr con facilidad su instrumentalización, y es solo hasta la entrada en vigencia de la nueva Carta Política, gracias a

las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, que empieza con dificultades a forjarse un cambio de orientación, que luchará por romper con esa tradición manipuladora de la opinión pública, tal como enseguida explicamos.

3.2. CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MANEJO DE LA TELEVISIÓN.

Un nuevo modelo de televisión se forjó a partir de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente y aunque su estructura básica se plasmó en la Constitución de 1991, su implementación tardaría aproximadamente cuatro años hasta la expedición de la ley 182 de 1995 y la posterior creación de la Comisión Nacional de Televisión.

Nuevos aires corrían por la televisión colombiana, sin embargo, el comienzo de este nuevo modelo no fue promisorio. Apenas iba el año 1997, cuando fruto de una controvertida licitación se produce el cierre de los noticieros AM-PM y QAP. Estos espacios informativos coincidentemente se habían caracterizado por su oposición al gobierno de turno, lo que motivó titulares como el publicado en el diario El Tiempo, en el que se indicó: “Monstruosidades existen por doquier en este país. Monstruosidades de la guerra, del secuestro, del cinismo. De la estupidez, de la manguala, de la corrupción. Y la televisión, por supuesto, no se salva de ellas”. (Coronado, 2009). Inclusive periódicos extranjeros como el diario argentino “La Nación” en edición del martes 29 de julio de 1997, registró esta noticia, poniendo de manifiesto la problemática colombiana ante la inapropiada intervención del gobierno en el cierre en masa de noticieros opositores (Anónimo, 1997).

No obstante lo anterior, la inspiración para esta nueva visión en el manejo del medio, obedeció al deseo del constituyente en 1991 de contar con una televisión dentro de un mercado en competencia que garantizara la pluralidad de la información, a través de una entidad independiente para la administración del sector que estuviera alejada de los gobiernos y también de intereses económicos. En este contexto histórico se materializarían los artículos 75 a 77 de la Carta Política. El primero de estos artículos fijando el carácter público del espectro electromagnético y el deber del estado de fomentar la pluralidad y la competencia; el artículo 76 designando la administración de la televisión en una entidad con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, y el 77 disponiendo la forma como estaría integrada la junta directiva de aquella entidad; sin embargo los frutos de este modelo solo se vieron claramente en sus comienzos cuando se le da un impulso notorio a la competencia a través del desarrollo de las diferentes modalidades y en especial creando televisión privada nacional. Luego esta entidad cae en un estado de aletargamiento en el que no se vuelven a conceder concesiones de televisión privada debido a defectos en el mismo modelo constitucional y la ley que lo desarrolló, tal como procedemos a explicar.

3.2.1. CONTRADICCIONES AL SENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.

Como dijimos anteriormente, la voluntad del constituyente de 1991, se encaminó a que el estado contara con una entidad que no dependería de los gobiernos de turno, disminuyendo así la posibilidad de que se repitieran los hechos lamentables de censura vividos durante la toma del palacio de justicia o las adjudicaciones con carácter político-partidista; sin embargo, una contradicción fundamental surgiría al seno de dicha asamblea, específicamente en la concepción

del artículo 77, lo que debilitó en gran medida la intención constitucional de autonomía institucional, tal como pasamos a explicar:

Si bien el artículo 76 preceptuaba que: “La intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio...”. El artículo 77 señalaba: “...La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una junta directiva integrada por cinco (5) miembros, la cual nombrará al director. Los miembros de la junta tendrán período fijo. El gobierno nacional designará dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión. La ley dispondrá lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la organización y funcionamiento de la Entidad...”.

Como puede observarse, atendiendo al contenido del artículo 76, nos encontrábamos en esencia ante una verdadera independencia del ejecutivo, pues la autonomía para el manejo de la televisión transcendía el ámbito de lo administrativo, otorgándole su propio patrimonio, criterio técnico y sobre todo rango constitucional. Sin embargo, aunque podría decirse que el carácter autónomo de la nueva entidad ya estaba dado por dicho precepto, el artículo 77 desvió la preestablecida autonomía al conformar la junta directiva de la entidad, con 2 delegados de la presidencia de la república, otro de los canales regionales y dos más “según dispusiera la ley”.

En este orden de ideas, la primera dificultad del modelo surgido en 1991 se presentó al establecer una entidad autónoma de los gobiernos (Art.76), pero, de manera contradictoria,

otorgándole una excesiva participación al ejecutivo en la integración de su junta directiva (Art. 77). Si lo que se quería era distanciar a los gobiernos del control del medio masivo debido a su nefasta incidencia en la libertad y pluralidad en la información, lamentablemente el artículo 77 surge como una figura extraña dentro del diseño constitucional, pues le permitió al presidente de turno nombrar a dos de los cinco representantes en su órgano de dirección, lo que puso en duda de antemano la existencia una real de autonomía.

Así las cosas la autonomía estaría condicionaba a la coyuntura política del momento y el poder de atracción del gobierno sobre un miembro más de la junta, para así obtener la mayoría en la toma de decisiones, echando por la borda la ansiada autonomía. Esto sin contar con que el gobierno en ejercicio tenía gran injerencia en la designación del representante de los canales regionales (Yances, 2003).

3.2.2. CONTRADICCIONES ENTRE LA CONSTITUCIÓN DE 1991, LA LEY 182 DE 1995 Y LA LEY 335 DE 1996.

La primera contradicción fácilmente apreciable entre la constitución y su desarrollo legal, fue la falta de voluntad política para poner en marcha los postulados constitucionales que ordenaban al estado crear una nueva política de televisión. Así, mientras la Carta Política de 1991 había definido las bases de un nuevo modelo, fue solo hasta 1995 cuando a través de la ley 182, se pone en marcha la nueva política de televisión y la nueva entidad con carácter autónomo, en concordancia con los postulados de independencia dictados por el constituyente, cuatro años atrás.

De otra parte, sumada a las contradicciones constitucionales entre los artículos 76 y 77 que debilitaban de entrada sus rasgos de independencia, la ley 182 de 1995 y la 335 de 1996, ahondaron las falencias para lograr una autonomía real y efectiva. Uno de los puntos más notorios ocurrió con la expedición de la ley 335 de 1996, pues cada gobierno además de contar con dos representantes y potencialmente con uno más de los canales regionales, tuvo la facultad de reglamentar el mecanismo de elección de los miembros de la junta directiva, lo que fortaleció su injerencia en su composición (Yances, 2003). Esta crítica cobra validez bajo el entendido de que el debilitamiento de la independencia de los medios afecta necesariamente la objetividad y pluralidad informativa, retomándose en parte los problemas que aquejaban al sector antes de la Constitución Política de 1991.

Otro aspecto se relacionó con el corto tiempo en el ejercicio del cargo de comisionado integrante de la junta. El artículo 6° de la ley 182 de 1995 modificado por el artículo 1° de la ley 335 de 1996, definió el periodo de los miembros de su junta directiva en dos años reelegibles por dos años más.

Bajo este esquema se conformaban juntas que no podían darle ninguna continuidad a políticas y proyectos que optimizaran la competencia y la pluralidad en la información. Además porque como era natural en su primer periodo los miembros de esta junta tratarían de crear las condiciones políticas convenientes para su reelección por los otros dos años, quedando en un segundo plano enfocarse en las necesidades y futuro del servicio. Es de mencionarse que inicialmente este periodo fue de cuatro años, pero la reforma incluida en la ley 335 de 1996, lo redujo a dos.

Asimismo, la crítica frente al corto periodo de los miembros de la junta aplica para el cargo de director, quién según el artículo 14 de la ley 182 de 1995 era elegido por un año, con la posibilidad de ser reelegido por otro año consecutivo, siendo este un lapso muy corto para la puesta en marcha y afianzamiento de proyectos que permitieran consolidar una verdadera competencia y pluralidad en los contenidos informativos.

Finalmente, dada la importancia del cargo y la especificidad en la materia, era de suponerse que la ley establecería requisitos serios de idoneidad y experticia para convertirse en comisionado de televisión; sin embargo las leyes en comento dejaron un gran vacío en este aspecto, estableciendo simplemente como condiciones, que los miembros de la junta tuviesen más de treinta años de edad y diez años de experiencia en el sector de la televisión. Experiencia que se acreditaba en muchos casos de manera controvertida, pues se acusaba el hecho de reunirse a través de empresas de papel.

Este modelo funcionó entre los años 1995 y abril de 2012, periodo del que es justo destacar algunos avances, como haber pasado de cuatro a ocho canales regionales, (Teleislas, Canal Capital, Televisión Regional del Oriente TRO, Teveandina, Telepacífico, Telecafé, Telecaribe y Teleantioquia), igualmente la actual cobertura de la televisión por cable, la creación por primera vez de canales privados que manejan de manera independiente e integral toda su programación y también la llegada de la televisión digital. Además poco mérito se le ha dado a que la entidad funcionara con su propio presupuesto sin quitar un peso del presupuesto nacional, ya que sus ingresos los obtenía de los operadores mismos y de ahí se alimentaba también la televisión

educativa y cultural administrada por RTVC a través del Fondo para el Desarrollo de la Televisión; no obstante, este fue para muchos un escaso resultado en un periodo de más de 16 años, en tanto quedaron tareas fundamentales pendientes, como un mayor y decidido fortalecimiento de la televisión pública, la eliminación de barreras para la entrada de inversión extranjera, lograr una reforma que le diera a la Comisión de Televisión una verdadera autonomía en sus decisiones y en definitiva haber culminado con éxito la entrada en operación de nuevos canales nacionales privados o al menos un tercer canal.

Es de anotar que en todo caso la CNTV continuó con la tendencia que antes ya había empezado su predecesor, el Consejo Nacional de Televisión, creado con la ley 42 de 1985, ya que es allí donde nacen los Canales Regionales que luego con la CNTV aumentaría en número, e igualmente la existencia por primera vez de la figura de la concesión a través de contratos adjudicados por concurso en igualdad de condiciones para la operación de la televisión por suscripción y espacios, que luego la CNTV continuaría implementado hasta crearse una cultura de adjudicación de las operaciones mediante procesos abiertos a los interesados, contrario a lo que había sucedido en el pasado como por ejemplo cuando se adjudicaban noticieros por los gobiernos de turno a la familias o personas ligadas con la política nacional, fenómeno aquí ya analizado, además con la CNTV nacerían nuevas modalidades como la televisión local, la televisión comunitaria y canales como el del Congreso, el Universitario, los cuales pese a que son consonantes con la pluralidad de la información, debido a su poca audiencia no constituyen competencia para los canales privados.

En conclusión, en el año 2012, una vez extinguido el modelo basado en una entidad de rango constitucional, la realidad nos muestra a la televisión como un sector más desarrollado que en 1995; pero cuyos esfuerzos no fueron suficientes para dejar atrás la concentración de oferta de contenidos y de audiencia por parte de Caracol y RCN.

3.3. SUPRESIÓN DEL MODELO CONSTITUCIONAL Y CREACIÓN DEL MODELO ACTUAL CON MAYOR INTERVENCIÓN DE LOS GOBIERNOS DE TURNO.

A través de múltiples proyectos de reforma constitucional se buscó la eliminación del modelo instaurado en la Constitución de 1991. El senador Juan Fernando Cristo, así lo corrobora en una entrevista para el periódico El Espectador (Tascón, 2010), ad portas de iniciarse el trámite del acto legislativo que le pondría fin definitivamente:

“...Casi en todos los periodos legislativos, desde 1999, se ha intentado eliminar la CNTV. Obtuvimos el mayor avance entre 2001 y 2002 cuando el proyecto de acto legislativo para clausurarla, fue aprobado en siete debates. En el octavo y último de ellos, que se dio en la plenaria de la Cámara durante un accidentada sesión, se hundió. En la puerta del horno se quemó el pan...”.

Sin embargo, con el acto legislativo 02 del 21 de junio de 2011 este modelo fue eliminado, bajo los argumentos descritos en la exposición de motivos, ponencias y debates al interior del Congreso, conforme a los cuales, se cometió un gran error por parte del constituyente al crear un modelo rígido en tanto constitucional, contrario al dinamismo del sector de las comunicaciones y a la vez inadecuado, debido a los fracasos de la Comisión Nacional de Televisión.

Sobre este aspecto es importante resaltar que las críticas que se hicieron durante el trámite del proyecto de acto legislativo, fueron en su gran mayoría de orden legal y no constitucional como debería suponerse en un trámite de reforma a la Carta Política. Así las cosas, se obvió casi completamente el análisis del contenido y razón de ser del artículo 76, que buscaba primordialmente dotar de autonomía la dirección estatal del medio debido a los antecedentes históricos que demostraban la nociva interferencia de los gobiernos de turno sobre la libertad de opinión y la libre competencia en el sector de la televisión.

La exposición de motivos presentada al congreso por el gobierno, tomó dos caminos principales (Gaceta 527, 2010); el primero apuntando a enfatizar las carencias de un organismo como la CNTV, cuyo diseño funcional estaba señalado en la ley 182 de 1995, y el segundo, mostrando a la Constitución Política como una norma pétrea o rígida, obstaculizadora del desarrollo del mercado de las telecomunicaciones, en tanto resultaba difícil adaptar sus preceptos a los nuevos adelantos y posibilidades tecnológicas.

Bajo la pauta anterior, se arguyeron razones para la reforma constitucional, tales como la entrada al mundo de nuevos fenómenos como: You Tube, Facebook, televisión por internet, telefonía móvil, la disgregación de funciones en un mercado actual convergente y, la obsolescencia, ineficiencia, corrupción y altos costos del ente encargado del manejo de la televisión, asuntos que distan del contenido del extinto artículo 76 de la Carta Política y su pretendida independencia de sectores políticos y económicos para la administración del medio.

Por último, es importante destacar que aún está pendiente que el Congreso de la República dicte una nueva política de televisión, mandato que se encuentra establecido en el acto legislativo 002 de 2011, de manera muy clara y sencilla, pero no por eso menos obligatoria:

“...Artículo 2°. El artículo 77 de la Constitución Política de Colombia, quedará así:

Artículo 77. El Congreso de la República expedirá la ley que fijará la política en materia de televisión...”.

Mientras este precepto no se cumpla, el desarrollo del sector perderá dinamismo, pues los mandatos de optimización de la competencia y pluralidad en la información no tendrán una bitácora clara, ya que seguirán manteniéndose las políticas fijadas en la ley 182 de 1995, norma que desarrolló precisamente la política de televisión bajo el modelo constitucional hoy extinto y que fue calificado de obsoleto durante el trámite de la reforma.

Fue en el año 2011 a través de la reforma constitucional -acto legislativo 002- cuando se deroga el artículo 76 C.P. y se sustituye el contenido del 77 C.P., lo que deja sin piso jurídico la existencia del ente autónomo para el manejo de la televisión, por lo que el congreso, acatando el mencionado acto, expide en el año 2012 la ley 1507, produciéndose así el desmonte definitivo del modelo constitucional. A través de esta nueva ley se crea una entidad con una composición y funciones muy similares a su antecesora, la CNTV, pero sin rango constitucional y dando cabida en su junta directiva al Ministro de TICS más otro designado del gobierno, lo que nos hace recordar al antiguo Consejo Nacional de Televisión bajo la vigencia de la ley 42 de 1985.

Esta concepción tiene como principal tarea demostrar que es la respuesta esperada a la problemática planteada durante la reforma constitucional, dando paso decididamente a la optimización de la competencia y la pluralidad en la información en materia de televisión; tarea que deberá comenzar con la adjudicación de por lo menos un tercer canal privado luego de 18 años de existencia de esta modalidad con solo dos actores en el mercado y teniendo en el horizonte la inminente oposición proveniente de los dos actuales canales, pertenecientes a dos de los más importantes e influyentes grupos económicos del país. No obstante, al momento de escribir este texto y luego de más de tres (3) años de creación de la nueva entidad, no se vislumbra ni siquiera la apertura de un nuevo proceso licitatorio para la tan anhelada llegada de un tercer canal, lo que sinceramente decepciona, máxime si se piensa en que la antigua CNTV al menos logró iniciar la modalidad de televisión privada con dos canales e intentó adjudicar uno más en dos ocasiones.

Finalmente, tal como lo destacamos en el título de este capítulo, el devenir histórico de nuestra televisión permite observar que desde Rojas Pinilla la televisión estuvo controlada por los gobiernos de turno, lo que desde ese momento la politizó y cerró las posibilidades de un ambiente en competencia y plural. Esta situación se esperaba superar con los nuevos tiempos, a raíz de la expedición de la Constitución de 1991, en un mundo más globalizado y dispuesto a una economía de mercado; sin embargo esto no ocurrió así reflejándose nuevamente la falta de voluntad política desde diversos sectores e instancias. Reflejo de esto, sin lugar a dudas, son todas esas contradicciones aquí planteadas, partiendo desde la Asamblea Nacional Constituyente que, queriendo quedar bien con todos los sectores, debilitó la concepción independiente que se quería con la Comisión de Televisión y dio cabida potencialmente a una mayoría gubernamental

en su dirección. Lo mismo puede afirmarse de las contradicciones entre la Constitución y las leyes que la desarrollaron, y así hasta hoy día, cuando el Congreso ignorando el mandato del acto legislativo 02 de 2011, se hace de la vista gorda ante su deber dictar una nueva política de televisión que nos ponga a tono con los nuevos tiempos, facilitando la llegada de nuevos operadores para que se consolide, sin mayores miramientos, una televisión pluralista.

4. ATRAPADOS EN EL STATU QUO DE CARACOL Y RCN. EL MERCADO ACTUAL DE LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA VISTO DESDE LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES DE COMPETENCIA Y PLURALIDAD EN LA INFORMACIÓN.

Tal como lo menciona Flint (2002) la competencia genera eficiencia, pues:

“...Se promueve la innovación y se ahorran costos. Se alienta la investigación y desarrollo, todo en beneficio del consumidor. Ante la ausencia de competencia los precios se distorsionan y las empresas se aletargan perdiendo interés en la eficiencia y concentrándose en ganancias indebidas a expensas de la sociedad a lo que se denomina costo social...”. (p.26)

Descripciones cómo la anterior sintetizan las ventajas que para una economía de mercado representa la competencia y los problemas que pueden presentarse en caso de que esta sea deficiente. En este sentido la Carta Política le da especial relevancia a la competencia, no solo en el artículo 333 al establecer que la libre competencia es un derecho de todos, sino también, de manera más específica, en el artículo 75, al señalar que el estado intervendrá para evitar los monopolios en el uso del espectro electromagnético. Sumado a lo anterior el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Constitucional, rechazan la concentración del mercado de medios y enfatizan la trascendencia de la competencia y la pluralidad en la información tanto para la realización de los derechos a la libertad de opinión e información como para el fortalecimiento de la democracia.

Contrastando lo anterior, veremos en este capítulo cómo la televisión privada nacional está acaparada por solo dos operadores, situación que de entrada deja muy mal parado el

cumplimiento de los mandatos constitucionales de competencia y pluralidad en la información. Esta realidad es muy preocupante pues como lo indica Pérez (2002), “...Las normas específicas sobre concentración de medios intentan evitar que algunos medios de comunicación consigan una influencia dominante en la opinión pública...”. (p.44)

Como vemos el débil cumplimiento de los mandatos de competencia y la pluralidad en la información, trae consigo una mayor posibilidad de que unilateralmente algún sector de nuestra sociedad determine las pautas de aceptación, legitimación o rechazo de la información según sus propios intereses, hecho que precisamente previene el artículo 75 de nuestra Carta Política.

En este orden de ideas veremos a continuación cuales son a nuestro juicio, las principales circunstancias que han afectado negativamente desde 1991 hasta hoy el mercado de la televisión, en especial el de la televisión privada nacional.

4.1. BARRERAS DE ENTRADA A NUEVOS COMPETIDORES EN EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN COLOMBIANA.

Bajo el mandato constitucional enmarcado en los artículos 75, 333 y subsiguientes de la Carta Política, así como los artículos 37 y 52 de la Ley 182 de 1995, la actividad del estado debe consistir de manera constante y decidida, en facilitar las condiciones para que opere y se abran las puertas a la iniciativa privada, preceptos que abarcan el mercado de la televisión, sin embargo como enseguida explicamos se han impuesto diferentes barreras de entrada a nuevos inversionistas, contraviniendo los mandatos constitucionales de optimización de la competencia y pluralidad en la información.

4.1.1. CLAUSULA DE EXCLUSIVIDAD

La primera de estas barreras claramente infranqueable, se presentó al inicio de las primeras concesiones otorgadas a RCN y CARACOL Televisión. Fue así como a través de los contratos celebrados se pactó una cláusula de exclusividad, según la cual el estado tenía que abstenerse de otorgar nuevas concesiones para esta modalidad por un lapso de diez (10) años (SECOP-2009).

Esta condición que empezó a regir a partir de la firma de los contratos, significó esperar hasta el año 2008 para que pudieran empezarse los trámites de adjudicación de un nuevo canal. Además acabada dicha exclusividad, la adjudicación de al menos un nuevo canal ha sido una tarea imposible, no solo por el fracaso de los dos únicos (2) procesos licitatorios hasta ahora iniciados, sino también porque no se vislumbra claramente cuándo se dará inicio a uno nuevo que aproveche la experiencia ganada a través de sus antecesores. Se observa también, que permitir la exclusividad a estos dos canales por diez años fue exagerando y los fortaleció en el mercado a tal punto que su injerencia en la formación de la opinión pública ha sido crucial para frustrar la adjudicación de al menos otro canal privado, tal como lo explicamos a continuación.

4.1.2. OPOSICIÓN DEL DUOPOLIO A LA ENTRADA DE COMPETENCIA.

La escasa presencia de competidores ha motivado que los dos únicos concesionarios existentes, traten de perpetuar el estado original de las cosas, debido a que el ingreso de un nuevo actor en el mercado les significaría abandonar su cómoda posición y tener que reajustarse ante lo que sería, entre otras incidencias, el tener que dividir sus ingresos ya no en dos sino en tres o por qué no, un número mayor de operadores.

Esta apreciación se ve reforzada según las siguientes cifras aportadas por la Autoridad Nacional de Televisión ANTV (2014), a través de respuesta a fallo de tutela:

INGRESOS REPORTADOS TELEVISIÓN PRIVADA NACIONAL AÑO 2012 (Cifras en pesos)	
Caracol S.A. año 2012	\$580.865.874.818
RCN Televisión S.A. 2012	\$610.498.576.614
Total General	\$1.191.364.451.432

INGRESOS REPORTADOS TELEVISIÓN PRIVADA NACIONAL AÑO 2013 (Cifras en pesos)	
Caracol S.A. año 2013	\$ 687.736.361.841
RCN Televisión S.A. 2013	\$ 620.281.821.803
Total General	\$ 1.308.018.183.644

Ante estas cifras resulta de más entrar a explicar los motivos para que hayan adelantado gestiones tendientes a evitar la entrada de un nuevo competidor. Además debe tenerse en cuenta que estos reportes sólo representan las ganancias obtenidas a nivel nacional, más no los ingresos obtenidos por la venta de sus programas en el exterior.

Adicional y muy importante, resulta también no perder de vista que estos reportes no contemplan el efecto que sobre ellos produce la auto pauta. Según lo analiza Bonilla & González (2004) la auto pauta se presenta ya que los grupos económicos al ser propietarios de los canales de operación nacional privada, diferencian el valor que cobran por pauta dependiendo de si la

empresa es o no del grupo. En caso de serlo el precio será menor. Según datos manejados en dicha investigación, tomando el año 1999 y el año 2002, el menor valor cobrado por Caracol a las empresas del grupo Santo Domingo se calcula en \$ 20.000 millones y de RCN al grupo Ardila Lulle en \$ 6.000 millones.

La auto pauta es también una muestra de los efectos de la concentración del mercado, pues refleja cómo estos agentes tienen la posibilidad de fijar unilateralmente los precios, fenómeno que se acentúa en tanto dichos medios pertenecen a grupos económicos con múltiples inversiones en empresas que potencialmente requieren de visibilidad publicitaria, situación sobre la que nuestra legislación no ha tomado ninguna medida para evitarla o regularla. Esta situación además de restar los aportes que se utilizan para la televisión pública, no permite medir en términos reales las ganancias del sector.

Así las cosas, las dos únicas licitaciones abiertas para la entrada de un nuevo canal privado, tuvieron que afrontar la constante oposición de las empresas propietarias de los dos canales nacionales existentes. El segundo, último, truncado y largo proceso finalizó con un fallo del Consejo de Estado (1101-03-26-000-2010-0036-01(38.924)- 2012, de 14 de febrero), en el que se decide la imposibilidad de otorgar dicho canal alegando una razón específica de orden procedimental, según la cual, no podía en concordancia con la norma vigente, existir un solo proponente habilitado para la subasta, tal como en efecto había ocurrido.

La posición asumida por los canales privados durante la licitación, para que no culminara con éxito este proceso de selección, fue sintetizada así por el portal de noticias “La Silla Vacía”:

“...Si se cumple el cronograma, en los próximos días se sabrá si el Grupo Planeta, como único proponente, se queda con el Tercer Canal. Si eso es así, RCN y Caracol perderán una batalla que emprendieron desde el 2007, cuando les anunciaron que les iba a salir competidor...”. (Vélez, 2010)

En artículos como este se describe cómo para evitar la ruptura del duopolio y así no compartir los ingresos anuales que superan el billón de pesos, el grupo Santo Domingo (Caracol) y el conglomerado Carlos Ardila Lülle (RCN), habían intervenido a través del lobby y abogados para impedir la llegada de un nuevo concesionario. Asimismo, se puso en evidencia el deliberado desprestigio del proceso contractual a través de los espacios noticiosos de estos canales:

“...Además de las tácticas jurídicas y políticas, estos dos canales también han utilizado el espectro electromagnético, que es un recurso público que ellos alquilan a través de una concesión, para hacerle guerra informativa a su potencial competencia, poniendo en ocasiones por encima del interés público de informar los intereses de su negocio...”. (Vélez, 2010).

Respecto a la intervención de estos grupos económicos en la frustrada adjudicación del tercer canal, también podemos citar el debate de control político llevado a cabo en el año 2010 en la Cámara de Representantes a la junta directiva de la CNTV, en la que varios congresistas manifestaron públicamente que, precisamente, el fracasado proceso licitatorio para la adjudicación del tercer canal de televisión, se debía a la oposición planteada por los actuales canales. Al respecto esto indicó el congresista John Jairo Roldán:

“...A nosotros nos ha llamado la atención como los canales de televisión RCN y Caracol intervienen en la adjudicación, dilatando la adjudicación [sic] porque hay unos intereses supremamente claros, hoy se divide la pauta por dos, con el tercer canal pues se tendría que dividir por tres, adicionalmente que estamos privando a la Comisión Nacional de Televisión de unos recursos supremamente importantes...”.
(Acta 002 Cámara, 2010)

Lamentablemente, es lógico suponer que ante la continuidad del oligopolio, cada vez que se abra una nueva licitación, los canales privados utilizarán las estrategias ya descritas para tratar de perpetuar con su enorme poder, su statu quo.

4.1.3. CONCEPTOS Y DECISIONES TANTO DE LA PROCURADURIA Y DEL CONSEJO DE ESTADO.

El primer intento de adjudicación de un nuevo canal se realizó en el año 2009, no obstante la junta directiva de la CNTV acogiendo un concepto de la Procuraduría, revoca el acto de apertura. La Procuraduría tomó como base principalmente el posible detrimento patrimonial del estado, en tanto consideró muy bajo el precio fijado para la concesión.

Sobre el particular esto dijo el Ministerio Público:

“...pese a que se trata de una recomendación por parte del Procurador para que se revoque el acto de apertura de la licitación, para nosotros en palabras sencillas y prácticas el proceso ha muerto, ya quedó en unas circunstancias que impiden su continuidad, no se trata ni siquiera de un proceso en estado moribundo o en estado de coma, para la Procuraduría General de la Nación este proceso ha finalizado, diferente es que la Comisión Nacional de Televisión considere que nuestra recomendación de revocatoria no es válida y decidan apartarse de la misma, esa circunstancia considero yo, podría eventualmente dar lugar al inicio de investigaciones disciplinarias... la adjudicación pese a las

recomendaciones que nosotros hemos efectuado, consumaría la afectación del patrimonio económico...”.

Adicionalmente, en el boletín 429 del 22 de junio de 2010, esto indicó:

“...Igualmente, la sugerencia de revocatoria emitida el 7 de enero de 2010, se fundamentó, entre otros aspectos, en la competencia del Procurador General de la Nación prevista en el numeral 37 del artículo 7 y en el numeral 3 del artículo 24 del Decreto 262 de 2000, en defensa del orden jurídico y del patrimonio estatal, habida cuenta que el precio base se fijó en un monto que a juicio de la Procuraduría iba en detrimento del erario público...”.

Un segundo intento fallido para la concesión del tercer canal, se daría con motivo de la licitación número 002, iniciada el día 7 de mayo de 2010. En sus pliegos de condiciones se estipuló que la adjudicación se realizaría a través del mecanismo de subasta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 de la ley 182 de 1995 y 72 de la ley 1341 de 2009.

Finalmente, el análisis que el Consejo de Estado hizo a esta modalidad de contratación, a la luz del deber de contar con pluralidad de interesados, dio pie para que se abriera la puerta a una nueva barrera de entrada que a la postre resultaría insuperable. Esa corporación a través de sentencia 38.924 del 14 de febrero de 2012, con ponencia del Magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, declarararía nulo el punto 4.11 del pliego de condiciones de la licitación para la escogencia de un tercer operador nacional privado de televisión, pues según interpretación del artículo 72 de la ley 1341 de 2009, en la etapa de adjudicación, esto es, para el momento de la

subasta, debía necesariamente existir pluralidad de oferentes habilitados y no solo uno, como en efecto había ocurrido.

Para entender la dimensión de la posición asumida en este fallo empezaremos por analizar el artículo 72 de la Ley 1341 de 2009, que establece:

“...Artículo 72. Reglas para los procesos de asignación de espectro con pluralidad de interesados.

Con el fin de asegurar procesos transparentes en la asignación de bandas de frecuencia y la maximización de recursos para el estado, todas las entidades a cargo de la administración del espectro radioeléctrico incluyendo al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión Nacional de Televisión, deberán someterse a las siguientes reglas:

Previamente al proceso de otorgamiento del permiso de uso del espectro radioeléctrico de asignación o de concesión de servicios que incluya una banda de frecuencias, se determinará si existe un número plural de interesados en la banda de frecuencias correspondiente.

En caso de que exista un número plural de interesados en dicha banda, y con el fin de maximizar los recursos para el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, se aplicarán procesos de selección objetiva entre ellos la subasta...”.
(Resaltados fuera de texto)

Como se lee, sin lugar a dudas se determina la existencia de un número plural de interesados, pero como lo dice la norma, la pluralidad se puede verificar al inicio del proceso de selección y no en la audiencia de adjudicación, como lo determinó el fallo en cuestión, por lo que se crea vía

jurisprudencial, una barrera de entrada que contrasta con los mandatos constitucionales que prescriben la libertad de empresa (Artículo 333), la libertad de fundar medios de comunicación (Artículo 20), la igualdad de oportunidades en el acceso a los medios y los mandatos para que se garantice la competencia y la pluralidad de la información y en definitiva evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético (Artículo 75).

Es del caso mencionar que no todas las posiciones coincidieron con el fallo del Consejo de Estado, este es el caso de la Procuraduría General de la Nación, la que a través de su Boletín 429 del 22 de junio de 2010, señaló, haciendo alusión al valor fijado para la concesión dentro de la Licitación 002 de 2010 y la validez de la adjudicación con un solo proponente:

“...En esta oportunidad fue fijado en un valor ostensiblemente superior, vale decir la suma de \$103.409.000.000 que podría incrementarse en un 10 % más frente a una única propuesta y en ese sentido, no resulta lesivo para los intereses que defiende la Procuraduría General de la Nación, toda vez que se cumple el objetivo de maximización de recursos el cual corresponde armonizar con los principios de la contratación estatal, según los cuales la Administración está en el deber de lograr la libre concurrencia, pero si agotados todos los medios a su alcance para su promoción, los posibles oferentes renuncian de manera voluntaria a la posibilidad de participar en proceso de selección, goza de la facultad de darle aplicación al artículo 90 del decreto 2474 de 2008...”.

Así las cosas, el peso jerárquico que debía tener el artículo 75 de la Constitución Política, para buscar promover la competencia y evitar las prácticas monopolísticas no tuvo relevancia, con el agravante de que tal problemática data de décadas atrás, tal como lo registran los debates de la

Asamblea Nacional Constituyente de 1991, hace 24 años, cuando se dijo sobre los monopolios por parte del Constituyente Alberto Zalamea, en intervención del 2 de mayo:

“...Aquí se hace toda una requisitoria contra los monopolios que en este momento estarían dominando la televisión y contra eso es que precisamente queremos abrir canales para que todo el mundo pueda intervenir no que se mantenga como se pretende la dictadura de los actuales dueños de las concesiones por doce años. Que es lo que va a pasar entonces señor presidente, estamos legislando para unos pocos o contra unos pocos estamos condenando al país al atraso, al atraso tecnológico, estamos institucionalizando una serie de privilegios absolutamente indebidos, estamos enterrando la democracia de la televisión... hay unos monopolios que tienen en este momento la televisión en sus manos, entonces pues precisamente abramos la televisión para que esos monopolios desaparezcan, hemos demostrado en la radio con cifras absolutamente incontrovertibles que no hay...y que no hay monopolio en la prensa, donde si hay monopolio es en la televisión; y es precisamente por eso que hay que abrir la televisión para que todo el mundo tenga la posibilidad, con canales libres, de expresar su opinión y la tengan todos los movimientos políticos y la tengan todos los conglomerados incluso, porque los conglomerados son indispensables para el avance tecnológico de la televisión en Colombia...”.

Finalmente, esperamos que a futuro las recomendaciones, conceptos, fallos y en general cualquier intervención en los procesos licitatorios, tomen en cuenta con el peso jerárquico que tienen, los pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los mandatos constitucionales que ubican por encima de ciertos razonamientos, la necesidad imperiosa de tener un mercado de canales privados en franca competencia.

4.1.4. OBSTÁCULOS PARA LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

Finalmente, los inversionistas extranjeros se ven enfrentados a otra barrera de entrada, debido al proteccionismo que promulga nuestro legislador respecto de la llamada “producción nacional”. Este fenómeno se encuentra establecido en el artículo 1° de la ley 680 de 2001; disposición conforme a la cual, se autoriza la inversión extranjera en sociedades concesionarias de televisión, cualquiera que sea su ámbito territorial, hasta en el cuarenta por ciento (40%) del total del capital social del concesionario.

Sobre este punto, a la luz de los mandatos constitucionales de competencia y pluralidad, no encontramos ninguna explicación valedera, sin embargo, la eficacia para alejar a los inversionistas extranjeros si se encuentra plenamente demostrada en el proceso licitatorio 002 de 2010, ya que dos de los interesados, uno proveniente de España, Pacsa (Grupo Prisa y Caracol Radio) y el otro de Venezuela, Grupo Rendiles (Cisneros) decidieron retirarse en parte, pues tal como se explica en el portal de noticias de internet, razonpublica.com: “... uno de los puntos sin resolver por parte de la CNTV, a juicio de los renunciantes, tenía que ver con los topes y condiciones que establece la ley colombiana para la inversión extranjera en la televisión abierta...”. (Yances, 2012)

De otro lado, según el artículo 2° de la ley 182 de 1995, los fines de la televisión, son:

“...formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. Con el cumplimiento de los mismos, se busca satisfacer las finalidades sociales del estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la

paz, y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local...”.

Sin embargo, encontramos que en la realidad la llamada producción nacional se encuentra soportada en su gran mayoría por telenovelas, en las que lejanamente se aprecia algún rasgo de los fines que deben guiar a nuestra televisión y, adicionalmente, los noticieros tienen escaso nivel de análisis.

Así pues, sin indagar en la clase de televisión que se realiza en el país o su evidente contradicción con los fines televisivos, nuestro legislador mantiene vigente la Ley 680 de 2001 que en su artículo 4º, ordena a cada operador de televisión abierta y concesionario de espacios en los canales de cubrimiento nacional, cumplir con los siguientes porcentajes mínimos de producción nacional:

De las 19:00 horas a las 22:30 horas “Horario Triple A” el 70%.

De las 22:30 horas a las 24:00 horas, el 50%.

De las 00:00 horas a las 10:00 horas, el 100% de la programación será libre y de las 10:00 horas a las 19:00 horas el 50% de la programación será de producción nacional.

Adicionalmente, pese a la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el art. 21, Ley 1520 de 2012 estableció que los sábados, domingos y festivos el porcentaje de producción nacional transmitido será mínimo del 30% en los siguientes horarios: De las 19:00 horas a las 22:30 horas (triple A), de las 22:30 horas a las 24:00 horas y de las 10:00 horas a las 19:00 horas.

En este orden de ideas, partiendo de la controvertida calidad de los contenidos de nuestra televisión y la escasa atención que los canales muestran por la aplicación de los fines establecidos; no resulta claro cuál es el papel de la restricción en mención, pues los anhelos legales como la educación, la sana recreación, la promoción por el respeto de las garantías, los derechos fundamentales, la paz, la difusión de los valores humanos y nuestras expresiones culturales, no van de la mano con la programación que generalmente transmiten los canales privados.

4.2. EFECTOS DE LA CONCETRACIÓN DEL MERCADO

Bajo el actual estado de las cosas, la situación en materia de concentración del mercado parecería estar más acentuada que en el sistema mixto, pues las programadoras hegemónicas de dicho sistema, Caracol Televisión y RCN Televisión, pasaron a contar con menos competidores a través de la adjudicación de todo un canal para la transmisión para su programación. Estas concesiones, si bien se realizaron siguiendo el mandato constitucional para el desarrollo del sector, mediante el apoyo a iniciativas de carácter privado, con el tiempo al no darse el ingreso de nuevos competidores, han permitido el incremento del efecto monopolizador de estos dos canales comerciales.

Otro aspecto que termina por socavar la competencia y la pluralidad en la información, lo representan los índices de audiencia, conforme a los cuales, los dos únicos operadores en esta modalidad del servicio, concentran entre el 90.8% y el 88.02% de la audiencia entre Canales Nacionales, regionales y locales (ACIM-EGM, 2014). Esta falta de dinamismo crea además un

efecto negativo en toda la cadena de producción del sector, a continuación relacionamos algunos de los sub mercados que estarían afectados (Nieto, 2002):

- La administración de cuentas: Compuesto por las compañías de publicidad que producen comerciales, las cuales debe limitarse principalmente a los espacios publicitarios dispuestos por los dos únicos canales.

- La inversión en espacios para pauta publicitaria: Esta es la principal fuente de ingresos de un canal. La fijación del precio de los espacios para ser usados por los diferentes clientes, se ve limitada a la escasa competencia que representan los dos canales privados.

- Diseño, producción y administración de contenidos: La participación de las empresas productoras de contenidos se ve limitada principalmente a la contratación que surge de parte de estos dos canales.

- Servicios de Red: Este sub mercado se encarga de la transmisión de la señal. La red de los dos operadores actualmente es compartida por ellos.

- Información y cultura desde la televisión: Dado que la televisión educativa y cultural depende de los recursos del fondo para la televisión, la escasa cantidad de competidores es directamente proporcional al músculo financiero de este tipo de proyectos.

En este sub mercado confluyen dos deberes del estado, uno consistente en propiciar escenarios competitivos en el sector y otro, gracias a los ingresos obtenidos por dichos competidores, permitiendo el fortalecimiento de los contenidos educativos y culturales, a través del giro de parte de los recursos a su producción y transmisión.

- Equipos de Televisión: Se relacionada con los fabricantes y proveedores de equipos para canales, empresas de publicidad y productores de contenidos, los cuales necesariamente al aumentar la competencia tendrían una mayor demanda.

Finalmente otros sub mercados afectados son los de servicios de interactividad, prestados a través de algunos operadores de telefonía celular e internet y también el de exportación de contenidos.

Frente al recurso humano (actoral, periodístico, técnico y administrativo) al pertenecer a un sector concentrado, la demanda de sus servicios es menor y el margen de negociación de sus honorarios automáticamente se reduce.

Así pues, la entrada de un nuevo competidor plantearía la necesidad de invertir más, debido a las exigencias que trae un escenario verdaderamente competitivo, esta potencial eventualidad también explica la oposición a una nueva adjudicación.

También es importante señalar que el fenómeno de concentración que actualmente afecta a la televisión privada nacional, necesariamente influye de manera negativa en la calidad del

producto final, pues en términos generales ante la ausencia de competencia: “...los precios se distorsionan y las empresas se aletargan perdiendo interés en la eficiencia...” (Flint, 2002, p. 26).

Muestra de la afectación negativa a la competencia y pluralidad en la información, debido a la existencia del duopolio en la televisión privada, son los acuerdos anticompetitivos, que la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a través de la Resolución 23.890 de 2011, al declarar que RCN Televisión S.A., CARACOL Televisión S.A., la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias e IBOPE Colombia S.A.S., contravinieron el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y los numerales 5 y 10 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

Para entender esta sanción debe aclararse primero, que dentro del sub mercado de inversión en espacios para pauta publicitaria, resultan de vital importancia las mediciones de audiencia y el análisis de las mismas, labor que en Colombia desarrolla la empresa IBOPE casi de manera exclusiva para televisión. En palabras de la misma Superintendencia: “...es la única empresa que por su conocimiento en el tema y la disponibilidad de software y hardware especializado, cuenta con la infraestructura necesaria para proveer al mercado de forma inmediata y detallada, la medición de sintonía y de inversión publicitaria en televisión...” (SIC- Res 23890-2011 p.21). Esta posición privilegiada se suma a la de los otros sancionados; la UCEP, (Unión Colombiana de Empresas Publicitarias) recogiendo el equivalente al 80% de la pauta publicitaria, a través de agencias de publicidad y centrales de medios agremiadas, y también la de RCN y CARACOL con el 81% de la audiencia (SIC- Res 23890-2011 p.3). Bajo esta situación y atendiendo las condiciones pactadas en el contrato firmado en el 2009, las empresas contratantes de las mediciones tuvieron la facultad de condicionar a quién podía IBOPE suministrar el estudio.

Ahora bien, condicionar la entrega de este estudio obligado o “moneda de cambio” dentro del mercado publicitario de televisión, hizo que los contratantes fueran automáticamente los dueños de los estudios y asimismo les permitió elevar ostensiblemente las tarifas que eran aplicadas a sus competidores: “...el promedio de incremento anual de la tarifa de acceso al estudio elaborado por IBOPE para las 14 empresas referidas, las cuales no hacían parte del acuerdo... ascendió a 47.84% con un nivel máximo de 123.39% de incremento y un mínimo de 18.66%...”. (SIC- Res 23890-2011 p.21).

De igual manera las partes del contrato consagraron explícitamente exclusiones para el acceso al estudio. Este fue el caso de los canales extranjeros, quienes no tuvieron acceso al él por más de 8 meses, ya que los canales internacionales, según la interpretación de los contratantes, no podían operar legalmente en Colombia y además tenían restringida la contratación de pauta en el país, lo cual no tiene ningún sentido. Por si fuera poco, los contratantes dieron un plazo de noventa (90) días a la empresa IBOPE para que diera por terminados los contratos preexistentes con estos canales.

Así las cosas, la Superintendencia decide imponer la sanción, pues concluyó que este contrato era generador de un acuerdo catalogado como restrictivo, en tanto los contratantes al hacerse dueños del estudio, limitaron la disponibilidad de información, misma que permitía de manera racional definir políticas individuales de precios, además afectó la participación en el mercado de agencias de publicidad, centrales de medios y canales internacionales, lo que acentuó la posición privilegiada de los contratantes (SIC- Res 23890-2011 p.34).

Como podemos observar, bajo el estado actual de la televisión, los colombianos tendremos que enfrentar los problemas más graves y variados que plantean las prácticas monopolísticas, que van desde el menoscabo de la democracia ante la reducción para los individuos de las alternativas de información, hasta la afectación de los precios dentro de los sub mercados de la producción de televisión. De otra parte, el hecho de que en más de dieciocho años, no se haya podido adjudicar ni un solo canal de televisión privada, revela en su génesis, nuevamente la falta de voluntad política de impulsar el sector hacia la conformación de una opinión pública pluralista, pues la fuerza de la tradición a veces es perversa y desde Rojas Pinilla los gobiernos entendieron que los medios deben ser utilizados para auto promoverse, ya sea bajo un esquema intervencionista o como ahora, bajo un esquema privatizador, que contradictoriamente permanece indiferente al desarrollo de la competencia, dándole la espalda a la democracia al crear barreras de entrada basados en requisitos legales adicionales para las licitaciones, acuerdos contractuales a diez años para que no entren más operadores, precios y oferentes mínimos en subastas, etc., lo cierto es que en últimas no se pondera la supremacía de los tratados internacionales sobre libertad de expresión, ni tampoco la Constitución, en especial su artículo 75, siendo supuestamente mandatos superiores de imperioso cumplimiento.

5. “LA TAL CONVERGENCIA NO EXISTE”. APOORTE A LA COMPETENCIA Y LA PLURALIDAD DE LA INFORMACIÓN DESDE LA CONVERGENCIA Y LAS MODALIDADES DE TELEVISIÓN DIFERENTES A LA PRIVADA.

En este capítulo analizaremos comparativamente las preferencias de la audiencia televisiva en Colombia, inclinadas ostensiblemente hacia los canales privados, y cómo de manera alternativa, empieza a gestarse un fenómeno a favor de la competencia y la pluralidad, desde los medios en convergencia que se transmiten especialmente a través de la red de internet.

Comparativamente la audiencia de televisión en Colombia, entre canales nacionales privados, públicos nacionales, regionales y locales, de acuerdo con los cálculos realizados por esta investigación y los datos aportados por el Estudio General de Medios 2014 para televisión, es la siguiente:

Canal	Porcentaje
Canal Caracol	90,8982905
Canal RCN	88,0258401
City TV	39,5129
Señal Colombia	17,2255636
Tele Antioquia	15,5097471
Canal 1	15,0585171
Canal 13	11,7097049
Canal Capital	10,7764012
Tele Pacifico	10,6444593
Tele caribe	9,23879207
Tele Medellín	6,05048065
Canal Institucional	5,08918933
Tele Café	3,29854864
TRO	2,76449791

En primer lugar llama la atención la abrumadora diferencia entre los canales privados con el resto de operadores, siendo CITY TV la siguiente en sintonía 40 puntos porcentuales por debajo. CITI TV es un canal local-privado, con cobertura y contenidos informativos principalmente

referentes a la capital del país, por lo que tal condición hace que tampoco en este sentido sea comparable con los canales privados.

Dentro de las modalidades de televisión distintas a la privada nacional y como representante sobreviviente del sistema mixto, se encuentra el canal uno, a través del cual se transmiten los noticieros Telepaís, Noticias Uno y CMI. Estos dos últimos representan una alternativa frente al tratamiento casuístico, anecdótico, muchas veces amarillista y poco investigativo de los canales privados, sin embargo, bajo las mediciones de audiencia, esta modalidad no representa más que el 15.05%, lo que le resta bastante importancia en términos de competencia y pluralidad.

Por otra parte está la televisión pública nacional, compuesta por: Señal Colombia, canal que transmite contenidos educativos y culturales; Señal Institucional, Canal que difunde las políticas del estado, debates del Congreso y la actividad de las entidades públicas. Este canal también cuenta en su programación con noticieros internacionales como Euronews y las noticias internacionales del canal alemán Deutsche Welle. La audiencia de estos se encuentra entre el 17.2% para Señal Colombia y 5.08% para el Institucional, como se ve es tajante la diferencia en audiencia respecto de los canales privados, pero aun así no debe desconocerse su grano de arena a la pluralidad.

Adicionalmente, hacen parte de nuestra televisión pública los Canales Regionales: Teleantioquia, Telecaribe, Telecafé, TRO, TV Andina (Canal 13), Telepacífico, Teleislas y Canal Capital, los que se encargan de difundir temas territoriales según su área de cobertura. Además, encontramos un canal universitario, transmitido a través de los operadores de televisión

por cable. Es de anotar que en el caso de estas dos modalidades, sus bajos niveles de producción, dan como resultado un formato poco atractivo, el cual se refleja en sus modestos niveles de audiencia, siendo Teleantioquia el más visto con una audiencia de hasta el 15.5%.

De otra parte, debe destacarse la consolidación de la cobertura de la red de los operadores de televisión por suscripción cuyo cubrimiento llega al 84.4% (LAMAC, 2013), por ello es relevante mencionar el aporte a la competencia y pluralidad informativa, proveniente de los noticieros de producción nacional transmitidos por este tipo de operadores. Son ejemplo de este fenómeno, los canales “El Tiempo” y “Cable Noticias”, los cuales se dedican exclusivamente a la transmisión de noticias. Su audiencia va en incremento tendiendo a consolidarse como una alternativa informativa importante frente a los noticieros de los canales privados. Su importancia se verá reflejada en la medida en que mejoren la calidad de su producción y también en tanto los operadores de cable y satelital sigan extendiendo su cobertura.

Como podemos observar existe todo un camino por recorrer a fin de consolidar y hacer atractivos otros tipos de televisión diferentes a los de los operadores privados nacionales, para que así modalidades como la mixta, la local privada y la pública nacional regional y local, sean una verdadera alternativa para las grandes audiencias. Otro aspecto a destacar lo constituye la televisión por suscripción, ya que empieza a generar una dinámica que promete a futuro acercarse al mercado informativo dominado por los dos canales privados; pero si hablamos de un auténtico dinamismo del mercado y que a la vez promueva la pluralidad, este deberá provenir del otorgamiento de nuevas concesiones privadas nacionales -cuya producción noticiosa se origine en nuestro país- pues es allí donde se define a la televisión

como el principal escenario del foro nacional, hoy restringido a dos puntos de vista para aproximadamente el 88.02% de los espectadores (RCN Televisión) y 90.8% (CARACOL Televisión) entre Canales Nacionales, regionales y locales (ACIM-EGM, 2014) en un país de 44 millones de habitantes.

5.1. “LA TAL CONVERGENCIA NO EXISTE”. APOORTE A LA COMPETENCIA Y LA PLURALIDAD DE LA INFORMACIÓN DESDE LA CONVERGENCIA.

La convergencia tiene diversas maneras de apreciarse, sin embargo es en primera medida un fenómeno tecnológico que permite la circulación de información y servicios diferentes por la misma red fija o inalámbrica, situación que ha sido posible gracias a la llegada del internet de alta velocidad y la televisión digital (Dong, 2005).

La circulación de datos de manera integrada, unida a los constantes avances tecnológicos, han dado lugar a una gran variedad de posibilidades, lo que dificulta la clasificación de los diferentes tipos de convergencia, no obstante, en términos generales, podemos apreciarla desde los siguientes puntos de vista, además del tecnológico:

Convergencia Organizacional: Hace referencia a una misma empresa prestando diversos servicios de manera simultánea. Es así como hallamos en la actualidad empresas que prestan el servicio de Internet, televisión y telefonía y otras que poseen un mismo portal de internet a través del cual ofrecen, noticias ya sea escritas o en audio y video, correo electrónico, motor de búsqueda, etc.

Convergencia Regulatoria: Las empresas al ofrecer simultáneamente diversos servicios, han generado en los gobiernos la necesidad de regularlos de manera unificada, integrando normas y entidades.

Convergencia de Pantalla: Los consumidores pueden acceder a través de un mismo terminal (teléfono móvil, tableta, computador o televisor) a medios como Internet, televisión, radio, video, chats, entre otros.

Así las cosas, complementaria a la información que se transmite por los dos únicos canales privados de televisión, encontramos hoy versiones de los principales diarios y revistas del país y del mundo circulando por la red. Igualmente, la permanente portabilidad de estas publicaciones, a las que se puede acceder ya no sólo desde el computador sino también desde el televisor, teléfono celular o tableta, de alguna manera merman del poder hegemónico que en materia de audiencias e influencia sobre la sociedad ha tenido históricamente la televisión privada nacional.

Otro factor que se suma al fortalecimiento de la competencia y pluralidad de la información debido a la convergencia, es la existencia de portales internacionales como Yahoo, MSN, Google o Terra, entre otros, que ofrecen ediciones con noticias locales e internacionales y la presencia y alta aceptación de las redes sociales, encabezadas por Facebook, Twitter y YouTube, las que han jugado episódicamente papeles decisivos en la creación de opinión pública. Eventos como la movilización nacional del paro agrario del año 2013 son un claro ejemplo de cómo a través de las redes sociales se ha privilegiado inusitadamente la posición del ciudadano del común, quién ha encontrado gracias a estos recursos tecnológicos, una manera eficaz de masificar su propia

opinión. Estas posibilidades generadas por la convergencia, aunque esporádicas, representan un gran avance para el pluralismo y hacen algún contrapeso al indiscutible predominio de la televisión privada nacional como eje fundamental en la formación de la opinión pública.

Sobre el particular episodio del paro agrario del año 2013, en el que el presidente de la república, al parecer ignorando las redes sociales, señala públicamente que, “El tal paro agrario no existe”, citamos la revista semana en artículo del 31 de agosto de 2013, a través del cual se describen los hechos tomando en cuenta la fuerza que le dio a la protesta la utilización de los medios converges:

“...Por una semana, el paro agrario se había desarrollado en los bloqueos de las vías en varias regiones del país con gran impacto en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Ese día el presidente Juan Manuel Santos lanzó la tristemente célebre frase según la cual: “El tal paro nacional agrario no existe”. Una herramienta fundamental en el crecimiento de la ‘rabia’ urbana ha sido las redes sociales. Las plataformas de Twitter y Facebook sirvieron para que los ciudadanos, y también instigadores virtuales, monten videos filmados en teléfonos celulares, cámaras y tabletas con las acciones represivas del escuadrón antimotines de la Policía (Esmad). Fotos e imágenes de los bloqueos, las marchas y los actos vandálicos han circulado sin parar en los últimos días. Si bien varios videos eran falsos, en la mayoría de las ocasiones ayudaron a los espectadores a contrastar las versiones oficiales....”.

En cuanto a la Televisión Digital, con el Acuerdo No. 008 de 2010 expedido por la CNTV, se adoptó el estándar tecnológico europeo de Televisión Digital Terrestre y se establecieron las condiciones generales para su implementación. Este estándar fue luego actualizado a través del Acuerdo No. 004 de 2011 de esa misma entidad. Según el Informe Anual del Sector de la Televisión 2013, la Autoridad Nacional de Televisión espera que de acuerdo a la inversión y

gestiones realizadas, en el año 2015 se logre una cobertura poblacional del 73.75% (ANTV, 2014). Tal como lo señala la ANTV en su portal de internet, las principales ventajas de esta tecnología son: Liberar espacio en el espectro radioeléctrico con el fin de poder usarlo para otras Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC, darle la posibilidad a los colombianos de recibir de manera gratuita televisión de alta definición tanto en video como en audio y aumentar el número de canales en televisión abierta. La migración definitiva del sistema análogo al digital se tiene prevista para el 31 de diciembre de 2019.

5.2. DIVERGENCIA NORMATIVA E INSTITUCIONAL DENTRO DE UN ESCENARIO CONVERGENTE.

Pese a que en nuestro país la convergencia empresarial y de pantalla ha ganado terreno, las disposiciones legales y regulatorias, así como su organización institucional no parecen aún haberse adaptado a esta nueva realidad. Un claro ejemplo lo representa el carácter diferenciador que la ley y la regulación le conceden a la televisión frente a los demás medios. Tal como lo señala Dong (2005), la aplicación de regulación con base en regímenes preexistentes a los nuevos servicios convergentes, no puede ser eficaz y según Bárcena (2009):

“...En la práctica, la convergencia tecnológica representa una ruptura del modelo regulatorio de las telecomunicaciones que altera los fundamentos técnicos de las clasificaciones de servicios y la emisión de licencias, así como la separación institucional y legal entre los diferentes sectores de TIC, particularmente entre los de telecomunicaciones y radiodifusión, es decir, la lógica regulatoria tradicional perdió sus fundamentos en el nuevo contexto...”.

De acuerdo a esta nueva realidad, muchos países han actualizado su regulación tendiendo hacia la unificación de sus organismos para hacer frente a la industria emergente, bajo la lógica de que si existe convergencia empresarial y tecnológica, también debe haber una convergencia normativa e institucional. Esta actualización incluye, como lo menciona Dong (2005), la posibilidad de fusionar organismos preexistentes, así como la re-conceptualización de las definiciones utilizadas para equipos, tecnologías y servicios, lo cual facilita la aplicación normativa dirigida a servicios que, aunque diferentes, ahora se encuentran interconectados gracias a la convergencia, lo que incluye a la televisión.

Según el documento publicado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones titulado “Diagnóstico del sector de televisión en Colombia y consulta pública para una agenda convergente”, países como Estado Unidos, Reino Unido, Australia e Italia, han optado por tener una entidad convergente (CRC, 2011). La pérdida de exclusividad de la actitud pasiva que tradicionalmente tuvo el receptor de la información de televisión, la portabilidad e inmediatez que permiten los equipos terminales modernos y a la posibilidad de acceder de manera inmediata a uno u otro servicio, son algunas muestras de los alcances que tiene la convergencia, realidad que también afecta a la televisión, haciendo que se reduzca de manera significativa la brecha legal y regulatoria que diferenciaba a esta última de los demás medios masivos de comunicación. Así las cosas, aunque la televisión mantiene su importancia, la nueva realidad tecnológica no le da una posición privilegiada sino más bien complementaria respecto de los demás medios de comunicación, por lo que no resulta del todo adecuado al nuevo orden mantener su diferenciación legal, regulatoria e institucional.

Es importante destacar que con la expedición de la ley 1341 en el año 2009, se dio un paso adelante en materia de integración normativa en lo que a TIC se refiere, fue así como se derogó un importante número de normas dispersas que complejizaban la comprensión del sector de las comunicaciones y mantenían la antigua terminología y la diferenciación entre servicios. Las normas dejadas atrás fueron:

Ley 74 de 1966, por la cual se reglamentaba la transmisión de programas por los servicios de radiodifusión.

Ley 51 de 1984, por la cual se dictaban algunas disposiciones en materia de radiodifusión sonora.

Ley 72 de 1989, por la cual se definieron conceptos y principios sobre la organización de las telecomunicaciones en Colombia y sobre el régimen de concesión de los servicios y se concedieron unas facultades extraordinarias al Presidente de la República.

Decreto-ley 1900 de 1990, por el cual se reformaron las normas y estatutos que regulaban las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines.

Ley 1065 de 2006, por la cual se definía la administración de registros de nombres de dominio.co y se dictaron otras disposiciones.

Ley 37 de 1993, por la cual se regulaba la prestación del servicio de telefonía móvil celular, la celebración de contratos de sociedad y de asociación en el ámbito de las telecomunicaciones y se dictaron otras disposiciones.

Ley 555 de 2000, por la cual se reguló la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS (Personal Communications Services) y se dictaron otras disposiciones.

Ley 422 de 1998, por la cual se modificó la ley 37 de 1993, hizo referencia al cubrimiento de la telefonía fija y móvil para municipios de difícil acceso.

Así mismo, se derogaron disposiciones como los artículos 33, 34, 35 y 38 de la ley de contratación estatal -Ley 80 de 1993- pues al expedirse la ley 1341 de 2009 automáticamente se descontextualizaron. Por ejemplo al referirse a la antigua clasificación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, o la entrega de títulos habilitantes exclusivamente para telefonía fija, se estaba en clara obsolescencia frente al nuevo régimen en el que se habla de las TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de una habilitación de carácter general.

Ahora bien, la principal crítica a la ley 1341 de 2009 respecto del nuevo ambiente convergente, proviene de la disgregación de funciones en tanto dispone en cabeza de por lo menos cuatro (4) entidades las competencias del sector, esto sin incluir como ya vimos a la televisión, lo que en la práctica hizo que tanto para operadores como para usuarios exista demasiada dispersión en lo que a habilitación, seguimiento y control de los servicios en convergencia se refiere.

Con el acto legislativo 02 de 2011, se derogó el artículo 76 y se modificó el 77 de la Constitución política, esto supuso basados en el nuevo ambiente convergente, la implementación de una nueva estructura que, acorde con los nuevos tiempos, pusiera fin al carácter diferenciador de la televisión sobre los demás medios, no obstante, con la ley 1507 de 2012, se crea una nueva entidad que hereda la mayoría de las funciones competencia de la antigua Comisión de

Televisión, postergando la necesaria integración. Adicionalmente, se dispersaron algunas competencias entre el Ministerio de las TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Dentro de la exposición de motivos que dio fin al modelo constitucional, se tocaron dos puntos a los que se les dio especial trascendencia, el primero relacionado con la entrada en el mundo de las TIC de YouTube, Facebook, la televisión por internet y la telefonía móvil, razón por la cual la visión constitucional para el manejo de la televisión resultaba obsoleta. Sobre el particular esto se manifestó:

“...Nadie imaginaba que en You Tube cualquier persona pudiera producir y colgar contenidos audiovisuales siendo los mismos accesibles de manera inmediata en cualquier lugar del mundo... nadie imaginaba el poder de las redes sociales como instrumento de comunicación y en donde también se comparten de manera inmediata cualquier tipo de contenido audiovisual... En 1991, tampoco nadie imaginaba que se podría ver televisión en un teléfono móvil o que los aparatos de televisión estuvieran conectados a Internet las 24 horas del día cómo los últimos que están siendo ofrecidos en el mercado. A su vez, para dicho momento, nadie imaginaba que el computador sirviera para ver televisión, hablar telefónicamente y consultar información, por lo que no es posible hacer diferenciaciones entre un servicio y otro...”. (Gaceta Congreso 527-2010).

El otro punto de especial trascendencia tratado en la exposición de motivos, fue precisamente la disgregación de funciones en un mercado actual convergente:

“...En 1991 nadie imaginaba que la infraestructura de telecomunicaciones también sería convergente, es decir que por un mismo medio se transmitirían todos los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, hoy en día por un cable de fibra óptica o de cobre se puede transmitir voz, Internet y televisión, de idéntica forma por el espectro radioeléctrico (inalámbricamente) van los mismos servicios... Por ello, es indispensable proveer al Congreso de la República de la flexibilidad requerida para que mantenga un marco legal vigente acorde a la realidad convergente de los contenidos audiovisuales y el acceso a los mismos por parte de los ciudadanos, y que se ajuste a las realidades tecnológicas y de mercado con el propósito de que estas tecnologías contribuyan a cerrar las brechas sociales y a mejorar la competitividad y la productividad del país...”. (Gaceta Congreso 527-2010).

Por lo anterior, fuerza es concluir que la exposición de motivos del acto legislativo 02 de 2011 no fue comprendida por la ley 1507 de 2012, la cual debía incluir a la televisión como un servicio integrado a los demás. En este estado de las cosas encontramos hoy que, de conformidad con la ley 1507 de 2012, las entidades del sector de las TIC tienen disgregadas las principales competencias en materia de televisión, de la siguiente manera:

Autoridad Nacional de Televisión: i) Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad, demás documentos privados e imponer las sanciones a que haya lugar; ii) La protección del televidente, al catalogarse legalmente a la ANTV como el principal interlocutor entre los usuarios y la opinión pública; iii) Ejercer la dirección y manejo de la actividad concesional; iv) Adjudicar las concesiones y licencias de servicio, espacios de

televisión, de conformidad con la ley; v) Coordinar con la Agencia Nacional del Espectro, los asuntos relativos a la gestión, administración y control del espectro radioeléctrico; vi) Ejercer el control y vigilancia por el cumplimiento de las normas relacionadas con los contenidos de televisión. vii) Velar por el fortalecimiento y desarrollo de la TV Pública y viii) Promover y desarrollar la industria de la televisión.

Comisión de Regulación de Comunicaciones: i) Clasificar las modalidades del servicio de televisión de conformidad con la competencia antiguamente asignada a la Comisión de Televisión en el Artículo 18 Parágrafo y artículo 20 literal a) de la ley 182 de 1995; ii) Regular las condiciones de operación y explotación de conformidad con la competencia atribuida a la antigua Comisión de Televisión en la misma ley, con excepción de los aspectos relacionados con la reglamentación contractual de cubrimientos, encadenamientos y expansión progresiva del área asignada y de los aspectos relacionados con la regulación de franjas y contenido de la programación, publicidad y comercialización, que corresponderán a la ANTV y, iii) la CRC tiene la función de establecer las prohibiciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, (atentar contra la competencia, el régimen de inhabilidades y los derechos de los televidentes). En el caso de fijación de las conductas que atenten contra el pluralismo informativo, estas serán fijadas por la ANTV.

Vemos como la ANTV y CRC tiene facultades regulatorias respecto de la televisión, adicionalmente la ley 1507 de 2012 mantiene en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, la competencia sancionatoria respecto de las prácticas que atenten contra la libre competencia y en la ANTV por violaciones a las condiciones de prestación del servicio,

(Artículo 11) incluida la función de protección a usuarios en televisión (Artículo 2, inciso 2), mientras que dicha protección para el caso de los demás servicios en convergencia empresarial (telefonía fija, internet y telefonía móvil) continúa en cabeza de la precitada Superintendencia.

De otro lado, según el artículo 14 de la ley 1507, la ANTV tiene la competencia para el otorgamiento y fijación de las condiciones de las concesiones en relación con el servicio de televisión y simultáneamente la Agencia Nacional del Espectro –ANE- tiene competencia sobre el régimen de uso del espectro electromagnético.

Como vimos en la exposición de motivos del acto legislativo 02 de 2011, la disgregación de funciones frena el desarrollo, por lo cual resulta contradictorio que con la ley 1507 de 2012, con lo cual se daba cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado acto, se haya eludido el compromiso de integrar el sector de las comunicaciones debido al fenómeno de la convergencia de medios. Así pues, aunque compañías como ETB, EPM, Claro o Movistar, ofrezcan telefonía fija y móvil, televisión e internet; su actividad debe responder a cada una de las entidades mencionadas anteriormente según sus competencias, lo que necesariamente dificulta la actividad empresarial del sector. Igualmente, otro paso adelante en esta convergencia normativa e institucional, seguramente se presente cuando se dé cumplimiento a uno de los apartes olvidados del acto legislativo 002 de 2011, según el cual es deber del legislador fijar la nueva política de televisión, mandato al que no se le ha dado cumplimiento y en el que radica uno de los principales motivos para que la televisión no se encuentre a tono con la realidad de las actuales Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, rezagándose la competencia y la pluralidad en la información.

6. CONCLUSIONES

1. La existencia de tan solo dos canales privados de televisión de cubrimiento nacional para cuarenta y siete millones de habitantes, con hasta el 90.8% de la audiencia, acarrea que en Colombia las garantías constitucionales de competencia y pluralidad en la información no se cumplan, ya que ante tal concentración del mercado, lo que estos dos operadores transmitan se convierte en determinante para la conformación de la opinión pública, quedando de lado la posibilidad para la sociedad de discernir de manera más abierta entre un número plural de fuentes de información y a través del debate libre de ideas, entendido este, como un ejercicio que involucra necesariamente la pluralidad.
2. La falta de competencia y pluralidad en nuestra televisión fue en principio consecuencia de la herencia manipuladora del medio, es así como desde la llegada de esta tecnología en 1955 y hasta 1991, abundaron las adjudicaciones con fuertes tintes políticos, situación que era facilitada por el alto intervencionismo en el mercado por parte de los gobiernos de turno. Desde la Constitución de 1991, se observa la carencia desde diversos sectores, de una verdadera voluntad política para conformar una opinión pública plural y diversa; si bien la Asamblea Nacional Constituyente creó una entidad independiente de los gobiernos para administrar la televisión, le dio potencialmente mayor cabida en su junta directiva al ejecutivo, luego, aunque se crea la televisión privada, en los contratos de concesión de CARACOL Y RCN Televisión se pacta la prohibición por diez años para adjudicar nuevos canales privados, pasados los diez años, la CNTV abre dos licitaciones pero desde los organismos de control y las altas cortes se generan pronunciamientos ante los que sucumben los últimos intentos de crear una televisión en competencia y pluralista.

3. La falta de una política clara de medios que fije un norte a las altas cortes y entidades del estado para que prime la competencia y la pluralidad en la información, ha hecho que los dos únicos procesos licitatorios abiertos desde el año 2007 hayan fracasado bajo consideraciones jurídicas y económicas que no ponderaron lo suficiente la afectación negativa de la concentración del mercado de la televisión sobre la democracia y la formación de una opinión pública libre y plural. En el primer proceso la Procuraduría no estuvo de acuerdo con los valores mínimos de oferta, y en el segundo el Consejo de Estado, indicó que debía haber más de un proponente habilitado para la subasta, estas decisiones si bien pueden tener un asidero legal, contribuyen indirectamente a la longevidad del duopolio de la televisión privada y retrasan la optimización de los artículos 75 y 20 de la Carta Política.
4. El actuar del duopolio RCN-CARACOL Televisión en los procesos licitatorios fallidos, ha corroborado las teorías económicas según las cuales, los monopolios hacen todo lo posible por mantener su statu quo. Ahora bien, esta misma condición hace que a futuro deba esperarse una conducta similar y se opongan con todo su poder, a nuevas adjudicaciones en detrimento de la formación de la opinión pública a partir de fuentes plurales de información.
5. Los dos operadores privados nacionales además de haber realizado acuerdos anticompetitivos, pertenecen a dos de los más grandes grupos económicos del país y exhiben palmariamente una programación bajo un mismo esquema como si se tratase de

hermanos gemelos, lo que le resta enormemente poder a la televisión nacional como agente dinamizador de la competencia y de la pluralidad en la información.

6. Los derechos a la libertad de opinión e información, se ven altamente afectados por el acaparamiento del mercado de la televisión privada nacional, pues tal como lo advierte el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la concentración del mercado de medios “conspira contra la democracia”, restringiendo la pluralidad en la información y la libertad de expresión, pues dificulta el proceso de conocimiento, en el que se busca, recibe y difunde informaciones e ideas de otros, quedando también en evidencia, la falta de cumplimiento por parte del estado colombiano de los compromisos asumidos al hacer parte de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, pacto de San José de Costa Rica de 1969.
7. Debido a su escasa audiencia, los canales públicos en comparación con los privados no constituyen competencia, ni aportan en medida considerable a la pluralidad en la información. Una tarea pendiente por parte del estado que repercutiría de forma positiva sobre la pluralidad en la información, provendría de brindar mayor apoyo a los realizadores independientes, mejorando el cubrimiento de la televisión pública y en definitiva creando oportunidades para que los contenidos culturales e informativos públicos tengan un formato más atractivo para el espectador.
8. Sobre la convergencia como fenómeno tecnológico, empresarial y legal, debe decirse que, aunque favorece indiscutiblemente tanto la creación independiente de contenidos y facilita el acceso a la información, queda por desarrollarse una red de internet -hasta los hogares-

que permita el acceso mayoritario a las familias de más bajos ingresos, tanto a nivel urbano como rural.

9. Si hay una convergencia tecnológica, empresarial y de pantalla, también debe haber una convergencia regulatoria e institucional, ya que los factores diferenciadores que permitían contar con regulaciones distintas entre una tecnología y otra se ha diluido. Mientras esto no ocurra se dificultará el seguimiento y la vigilancia de las concesiones, las cuales requieren un desarrollo normativo que abarque y entienda las nuevas posibilidades tecnológicas y empresariales, haciendo aún más difíciles las cosas para el incremento de la competencia y la pluralidad.
10. Una dinámica importante se gesta para la competencia y la pluralidad en la información desde los canales y espacios informativos que se transmiten a través de los operadores de televisión por suscripción, debido al aumento considerable de su cubrimiento y la presencia de nuevos espacios informativos, algunos de ellos abiertos al debate y la investigación. Se espera que desde esta fuente de competencia y pluralidad, una vez se consolide su audiencia, venga una contraposición a los canales privados y pueda ser una alternativa influyente sobre la formación de la opinión pública.
11. Un factor que incidiría enormemente sobre el dinamismo del sector de la televisión nacional y sobre el que el legislador se ha hecho de la vista gorda, consiste en darle cumplimiento al acto legislativo 002 de 2011, el cual ordenó dictar una nueva política de televisión que aún hoy espera dar a luz, proyecto en el que entidades como el Ministerio de

las TIC y la ANTV podrían jugar un papel crucial de liderazgo y gestión para poner a tono a la televisión con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

7.1. TEXTOS IMPRESOS

Abad, H.J., Sáenz, M., Ronderos M.P. & Samper D. (2004). Poder y Medio. Bogotá: Aguilar.

Acosta, L. J. (2006) Comisión de Televisión, Legitimación Constitucional. Tesis de Especialización. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

Anónimo. (2013, 31 de agosto). Paro agrario: las dos caras de la protesta. Revista Semana. Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/articulo/paro-agrario-dos-caras-protesta/356110-3>

ANTV. (2014, 27 de enero). Oficio 201400000944. Cumplimiento Fallo de Tutela No. 2013-00697.

Asamblea Nacional Constituyente Transcripción de las Sesiones Artículos 75, 76 y 77 de la Constitución Política de Colombia. (1991). Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango.

Asociación Colombiana de Investigación de Medios-ACIM-Estudio General de Medios-EGM, 2014. Cálculos y clasificación de esta Investigación.

Bonilla, E.C. & González, J.I. (2004). Regulación y Concesiones de la Televisión Colombiana- Destellos y Sombras. Bogotá D.C.: Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) Universidad Nacional-Comisión Nacional de Televisión.

Carrillo, A. M. & Montaña, A. M. (2006). Vértigo y ficción, una historia contada con imágenes. Noticieros de Televisión en Colombia 1954-1970. Signo y Pensamiento, 25 (48), 135 - 147.

- Chomsky, N. (2002). El Control de los Medios de Comunicación” recopilación artículos del autor “El control de Nuestras Vidas”. Colección el Pez en la Red. Editado por FICA Fundación para la Investigación y la Cultura. Colombia pag.139-140
- Congreso de la República. (2011, 18 de agosto). Exposición de Motivos acto legislativo 002 de 2011. Gaceta 527.
- Correa, J. D. (2004). Una Nación de Espectadores Activos. Kinetoscopio. 14 (70), 20-23.
- Flint, P. (2002). Tratado de la Libre Competencia. Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Friedman, M. (2002) Capitalism and Freedom. USA: The University of Chicago Press. USA.
- Garzón, J. C. (2014). Televisión y Estado en Colombia 1954-2014. Cuatro momentos de intervención del Estado. Facultad de Comunicación Social-Periodismo. Universidad Externado de Colombia.
- Luhman, N. (2000). La Realidad de los Medios de Masas. México D.F.: Anthropos.
- Morell, A. (2002). La Legitimación Social de la Pobreza. Barcelona: Anthropos.
- Ospina X. & Herrera, D. (2004). La Televisión en Colombia 50 Años - Una Historia Para el Futuro. Bogotá D.C.: Caracol Televisión.
- Pérez, A. (2002). El Control de las Concentraciones en Medios de Comunicación. Madrid: Dykinson S.L.
- Nieto, M. (2002). La Industria de la Televisión en Colombia Análisis Económico, Financiero y de Mercado. Bogotá D.C.: CNTV-EAN.

- Ramírez, M. L. & Arbeláez, I. (1993). Enfoque Sobre el Futuro de la Televisión en Colombia y su Proceso de Privatización. Tesis Pregrado. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia.
- Ramírez, L. (2003). El Gobierno de Rojas y la Inauguración de la Televisión: Imagen Política, Educación Popular y Divulgación Cultural. *Historia Crítica*. (22), 131-156.
- Ramonet, I. & Chomsky, N. (2008). *Cómo Nos Venden la Moto*. Barcelona: Icara.
- Sartori, G., (2005). *Homo Videns –La Sociedad Teledirigida-*. México D.F: Punto de Lectura.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2011, 29 de abril). Resolución Sancionatoria 23890.
- Vizcaíno, M. (1992). *Los Falsos Dilemas de Nuestra Televisión: Una mirada Tras la Pantalla*. Bogotá D.C.: Cerec-Acotv.
- Vizcaíno, M. (2005). La Legislación de la Televisión en Colombia: Entre el Estado y el Mercado. *Historia Crítica*. (28), 127-152.
- Yances, G. (2003). *Una Televisión En Construcción CNTV 1995-2003*. Bogotá D.C.: CNTV.

7.2. DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Anónimo. (1987, 1 de junio) El Desatope de la Ley 42. *Revista Semana*. Recuperado de <http://www.semana.com/imprimir/8964>
- Anónimo. (1997, 29 de julio). El Gobierno Colombiano se Encamina al Autoritarismo. *La Nación*. Recuperado de <http://www.lanacion.com.ar/73777-el-gobierno-colombiano-se-encamina-al-autoritarismo>

Cámara de Representantes. (2010, 11 de agosto). Acta 002. Proposición para Debate de Control Político sobre el Desarrollo del Proyecto de Televisión Digital Terrestre, Proyecto de Televisión Satelital Social y del Tercer Canal en la Comisión VI de Cámara. Recuperado de <https://www.google.com.co/#q=www.camara.gov.co%2Fportal2011%2Fgestor...%2F194-acta-02-comision-sexta>

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Declaraciones Conjuntas sobre Libertad de Expresión. Recuperado del sitio de internet: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Informe Anual 2003: Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio:
<http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202003.pdf>

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Jurisprudencia. Recuperado del sitio de internet:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/jurisprudencia/decisiones_cidh_temas.asp

Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC (2012, 23 de marzo) Documento Preparatorio: Diagnóstico del sector de televisión en Colombia y consulta pública para una agenda convergente, 2011. Recuperado de: <http://es.scribd.com/doc/239360862/Diagnostico-TV-CRC-23-03-2011-Para-Publicacion-sin-cc>

Consejo Latinoamericano de Publicidad en Multicanales – LAMAC, Estadística de cubrimiento para televisión por Cable (2013). Recuperado del sitio de internet:
<http://www.kienyke.com/confidencias/colombia-es-el-pais-con-mayor-cobertura-de-television-por-cable-en-latinoamerica/>

Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969, Recuperado del sitio de internet: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

Coronado, S. (1997, 26 de octubre). Monstruosidades existen por doquier en este país. Monstruosidades de la guerra, del secuestro, del cinismo. De la estupidez, de la manguala, de la corrupción. Y la televisión, por supuesto, no se salva de ellas. El Tiempo. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-671588>

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-05 de 1985. Recuperado del sitio de internet: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. (2012). Indicadores Básicos de Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC 2012. Recuperado del sitio de internet del DANE: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_2012.pdf

Dong, S. (2005). Technology Convergence and Regulatory Challenge: A case of Korean Digital Media Broadcasting. Info. Emerald Group Publishing. 7 (3). 47-58. doi: <http://dx.doi.org/10.1108/14636690510596793>

García, S., Gonza A. (2007). La libertad de expresión en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. Recuperado de: <http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion.pdf>

Gómez, J. A., Herrera, J. R. & Pinilla, N. (2010). Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. Bogotá D.C.: Colección Textos de Jurisprudencia. Recuperado de: http://editorial.urosario.edu.co/userfiles/file/Informe_comision_web.pdf

Hinckley, D. (2012). Americans spend 34 hours a week watching TV, according to Nielsen numbers. Daily News. Recuperado de: <http://www.nydailynews.com/entertainment/tv-movies/americans-spend-34-hours-week-watching-tv-nielsen-numbers-article-1.1162285>

Informe del Sector de la Televisión en Colombia 2013. (ANTV, 2014) Recuperado de <http://www.antv.gov.co/sites/default/files/content-types/report/1566/files/informesectorialtv2013.pdf>

Lizama, V. (2013). Lo último sobre el consumo de medios en Latinoamérica. Latin Link. Recuperado de <http://latinlink.usmediaconsulting.com/2013/10/lo-ultimo-sobre-el-consumo-de-medios-en-latinoamerica/?lang=es>

Orozco, C. (2010, 14 de agosto). “Ningún Ente (de TV) Será Plenamente Autónomo”. El Espectador. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articuloimpreso-219173-ningun-ente-de-tv-sera-plen>

Procuraduría General de la Nación. (2010, 22 de junio) BOLETÍN 429. Recuperado de http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2010/noticias_429.htm

Respuestas sobre Televisión Digital Terrestre. (ANTV, 2014). Recuperado de: <http://www.antv.gov.co/content/television-digital-terrestre/pagina/0/1>

Respuestas sobre Televisión Digital Terrestre. (ANTV, 2014). Recuperado de: <http://www.antv.gov.co/preguntas-frecuentes/television-digital-terrestre-tdt>

SECOP (2009) Licitación Pública No. 001. Estudio de Conveniencia y Oportunidad. Proceso de Selección para la Adjudicación de la Concesión de Televisión Abierta Privada Nacional. Recuperado de:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=09-1-42636>

SECOP. (2009) Licitación 001. Resolución de Revocatoria No. 004 del 7 de enero de 2010. Recuperado de:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=09-1-42636>

Steiner, C., Uribe, P. (2014). Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comentada. Konrad Adenauer Stiftung, Berlín. Alemania. Recuperado de:

http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/acc_ref/Convencion_Americana_sobre_Derechos_final.pdf

Superintendencia de Industria y Comercio (2011, 29 de abril) Resolución 23890 por la cual se imponen unas sanciones a RCN Televisión S.A., Caracol Televisión S.A., Unión Colombiana de Empresas Publicitarias e IBOPE Colombia S.A.S., entre otros. Recuperado de:

http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/documentos/normatividad/Publicaciones_Despatcho_3/sicdecisiones2/RESOLUCIONES_COMPETENCIA_ANOS/2011/RESOLUCION_23890_DE_29_DE_ABRIL_DE_2011_SANCION_IBOPE.pdf

Torres, M. (2013). Familias se reúnen más ante la TV, pero ahora como media hub. Mediatelecom. Recuperado de: <http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/agencia-informativa/noticias/item/47976-familias-se-reunen-mas-ante-la-tv-pero-ahora-como-media-hub.html>

Vélez, Cristina. (2010, 1 de julio). “Todas las formas de lucha” Contra el Tercer Canal. La Silla Vacía. Recuperado de: <http://lasillavacia.com/historia/16389>

Wohlers, M. & García, M. (2009) Enredos, Regulación y Estrategias Corporativas Frente a la Convergencia Tecnológica. CEPAL- Mayol. Recuperado de: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2000/S384E612009_es.pdf?sequence=1

Yances, G. (2012, 11 de marzo). Tercer Canal de Televisión: Un calvario jurídico y político. razonpublica.com. Recuperado de: <http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2790-tercer-canal-de-television-un-calvario-juridico-y-politico.html>

Zelada, C. (2004) Violaciones Indirectas a la Libertad de Expresión: El Impacto de la Concentración de la Propiedad de los Medios de Comunicación Social. Informe para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, capítulo V. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/medios/concentracion%20en%20medios%20Pages%20from%20Informe%20Anual%202004-3.pdf>

7.3. JURISPRUDENCIA

Corte Constitucional. Sentencia T-048 de 1993, M.P. F. Morón Díaz.
Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-048-93.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-484 de 1994, M.P. J. Arango Mejía.
Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-484-94.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-534 de 1994, M.P. A. Martínez Caballero.
Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-534-94.htm>

Corte Constitucional. Sentencia C-497 de 1995, M.P. E. Cifuentes Muñoz.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-497-95.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-093 de 1996, M.P. H. Herrera Vergara.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/c-093-96.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-350 de 1997, M.P. F. Morón Díaz.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-350-97.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-010 de 2000, M.P. A. Martínez Caballero.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-010-00.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1000 de 2000, M.P. V. Naranjo Mesa.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/T-1000-00.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-815 de 2001, M.P. R. Escobar Gil.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-815-01.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1172 de 2001, M.P. A. Beltrán Sierra.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1172-01.htm>

Corte Constitucional. Sentencia C-654 de 2003, M.P. C. Vargas Hernández.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-654-03.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1153 de 2005, M.P. M. Monroy Cabra.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-1153-05.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-391 de 2007, M.P. M. Cepeda Espinosa.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-391-07.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-439 de 2009, M.P. J. Pretelt Chaljub.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/T-439-09.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1037 de 2010, M.P. J. Palacio Palacio.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-1037-10.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-490 de 2011, M.P. C. Vargas Hernández.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-490-11.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-170 de 2012, M.P. J. Palacio Palacio.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-170-12.htm>

Consejo de Estado. Sentencia 38.924 del 14 de febrero de 2012, M.P. J. Santofimio.

Recuperado del sitio de internet:

<http://190.24.134.67/documentos/boletines/98/AC/11001-03-26-000-2010-00036-01%28IJ%29.pdf>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-580 de 2013, M.P. J. Pretelt Chaljub.

Recuperado del sitio de internet de la Corte Constitucional de Colombia:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-580-13.htm>

7.4. NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia, Gaceta Constitucional No. 116, Bogotá, 20 de julio de 1991.

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San José San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969.

Ley 155 de 1959, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas. Diario Oficial 30138 de enero 22 de 1960.

Ley 74 de 1966, por la cual se reglamentaba la transmisión de programas por los servicios de radiodifusión. Diario Oficial No. 32.116 de 28 de diciembre de 1966.

Ley 72 de 1989, por la cual se definieron conceptos y principios sobre la organización de las telecomunicaciones en Colombia y sobre el régimen de concesión de los servicios y se concedieron unas facultades extraordinarias al Presidente de la República.

Decreto-ley 1900 de 1990, por el cual se reformaron las normas y estatutos que regulaban las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines.

Ley 14 de 1991, por la cual se dictan normas sobre el servicio de televisión y radiodifusión oficial, Diario Oficial No. 39651 de enero 30 de 1991.

Ley 37 de 1993, por la cual se regulaba la prestación del servicio de telefonía móvil celular, la celebración de contratos de sociedad y de asociación en el ámbito de las telecomunicaciones y se dictaron otras disposiciones.

Ley 182/1995, de 20 de enero. Por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su desarrollo, entre otros aspectos en materia de telecomunicaciones. Diario Oficial No. 41.681 de Enero 20 de 1995.

Ley 335 de 1996, Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 42.946. Diciembre 24 de 1996.

Ley 422 de 1998, por la cual se modificó la ley 37 de 1993, hizo referencia al cubrimiento de la telefonía fija y móvil para municipios de difícil acceso. Diario Oficial 43.216 del 16 de Enero de 1998.

Ley 555 de 2000, por la cual se reguló la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS (Personal Communications Services) y se dictaron otras disposiciones. Diario Oficial No.43.883, de 7 de febrero de 2000.

Ley 680 de 2001, Por la cual se reforman las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996 y se dictan otras disposiciones en materia de Televisión. Diario Oficial No. 44.516. Agosto 11 de 2001.

Ley 1065 de 2006, por la cual se definía la administración de registros de nombres de dominio.co y se dictaron otras disposiciones. Diario Oficial 46344 de julio 29 de 2006.

Ley 1341 de 2009, Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 47426 de julio 30 de 2009.

Ley 1507 de 2012, Por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 48308 del 10 de enero de 2012.

Decreto 0101 de 1955 del 19 de enero, por el cual se crea la Televisión Nacional y se reorganiza la Dirección de Información y Propaganda del Estado de la Presidencia de la República. Diario Oficial 28671 del 31 de enero de 1955.

Decreto 1566 de 1960, del 30 de junio, por medio del cual se reorganizan las dependencias de la Radiotelevisora Nacional y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 30279 del 14 de julio de 1960.

Decreto 1635 de 1960, del 11 de julio, por el cual se reorganiza el Ministerio de Comunicaciones, y se determinan sus funciones. Diario Oficial 30295 del 3 de agosto de 1960.

Decreto 3267 de 1963, del 20 de diciembre, por el cual se dictan disposiciones sobre reorganización y funcionamiento del Ministerio de Comunicaciones. Diario Oficial 31265 del 30 de diciembre de 1963.

Decreto-ley 1900 de 1990, por el cual se reformaron las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines". (Derogado) Diario Oficial No. 39.507 de Agosto 19 de 1990.

Decreto 2153 de 1992, por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 40.704 de diciembre 31 de 1992.

Decreto 262 de 2000, por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos. Diario Oficial 43904 de febrero 22 de 2000.

Decreto 1161 de 2010, Por el cual se dictan algunas disposiciones relacionadas con el régimen de contraprestaciones en materia de telecomunicaciones y se derogan los Decretos 1972 y 2805 de 2008. Diario Oficial 47.679 de abril 13 de 2010.

Decreto 2573 de 2014, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 49363 de diciembre 12 de 2014.

Resolución 3502 de 2011, Comisión de Regulación de Comunicaciones, por la cual se establecen las condiciones regulatorias relativas a la neutralidad en Internet, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011. Diario Oficial 48285 de diciembre 16 de 2011.

Resolución 3066 de 2011, Comisión de Regulación de Comunicaciones, por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones. Diario Oficial 48073 de mayo 18 de 2011.